

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-13439-2020
CARATULADO : RIVERA/LUQUE

Santiago, quince de Marzo de dos mil veintidós

VISTO:

A folio 1, con fecha 16 de octubre de 2020, comparece **Tomás Ruiz Tagle Barros**, abogado, en representación convencional de **MARÍA FRANCISCA SALAZAR LUQUE**, ingeniero, **BERNARDITA ADRIANA GEMA LUQUE GUITART**, perito grafólogo, **PAULA RIVERA LUQUE**, ingeniero comercial, y **SERGIO ARTURO TRAUTMANN LUQUE**, comerciante, todos domiciliados para estos efectos en calle Cerro El Plomo N°5.855 oficina N°505, Las Condes, deduciendo demanda de nulidad de contrato, nulidad de testamento y declaración de indignidad para suceder en procedimiento ordinario, en contra de **PURIFICACIÓN LUQUE SÁNCHEZ**, dueña de casa, domiciliada en Pasaje A. Lovera o El Arenal, comuna de Valdivia, y contra de **MARÍA ISABEL SALAZAR LUQUE**, factor de comercio, domiciliada en calle Guillermo Acuña N°2896, comuna de Providencia, con la finalidad de que se declare: 1) que el mandato general otorgado por Amalia Luque Sánchez a Purificación Luque Sánchez, en escritura pública de fecha 27 de octubre de 2016, otorgada en la Notaría de Humberto Santelices Narducci, número de repertorio 11.586/2016, es nulo de nulidad absoluta, por haber sido otorgado por una persona absolutamente incapaz; 2) que el testamento otorgado por doña AMALIA LUQUE SÁNCHEZ, en escritura pública de fecha 20 de diciembre de 2016, en la



Notaría de Santiago de Patricio Raby Benavente, número de repertorio 14.405/2016, es nulo de nulidad absoluta, por haber sido otorgado por una persona absolutamente incapaz y, en consecuencia, debe quedar sin efecto su inscripción; 3) que Purificación Luque Sánchez, es indigna de suceder como heredera a su hermana, Amalia Luque Sánchez, por haber obtenido dolosamente disposiciones testamentarias de la difunta, al haberla compelido a otorgar el testamento singularizado bajo el (ii) precedente, a pesar de padecer la causante de la enfermedad de Alzheimer ;y 4) se condene en costas solamente a Purificación Luque Sánchez.

Explica que sus representados son sobrinos de Amalia Luque Sánchez, quien falleció a los 95 años de edad, el 25 de junio de 2020, mientras que la demandada Purificación Luque es hermana de la causante, y la codemandada María Salazar Luque, es sobrina. La causante nació el 26 de julio de 1924 en Málaga, España, y no contrajo matrimonio ni tuvo hijos. Tenía cinco hermanos y cuatro hermanas, todos fallecidos con excepción de Purificación Luque Sánchez y María Isabel Luque Sánchez.

Sostiene que, en los últimos siete años de su vida (2013-2020) la causante comenzó a desarrollar un cuadro de deterioro de la memoria, orientación, función ejecutiva y lenguaje, y que conforma el diagnóstico de Alzheimer, lo que se acredita con el informe de la doctora María Isabel Behrens Pellegrino de fecha 30 de noviembre de 2019.

Añade que la causante otorgó testamento solemne el 26 de noviembre de 2010, cuando se encontraba en pleno uso de sus facultades, ante el notario Raúl Perry Pefaur, en el que



individualizó los inmuebles de que era propietaria, e instituyó equitativamente como herederos y legatarios a su familia más próxima, es decir, sus hermanas vivas y sobrinos, entre los que se encontraban María Francisca Salazar Luque, Bernardita Adriana Gema Luque Guitart y Sergio Arturo Trautmann Luque.

Sin embargo, prosigue, con posterioridad, y producto de actos defraudatorios cometidos en su contra, la voluntad manifestada por doña Amalia fue vilmente modificada por Purificación Luque Sánchez, aprovechándose del delicado estado de salud de su hermana, con la finalidad de apropiarse de sus bienes. De no mediar el doloso actuar de la demandada, dicha manifestación de voluntad, que consta en el testamento de fecha 26 de noviembre de 2010 hubiera permanecido vigente.

Agrega que el 27 de octubre de 2016, cuando la causante ya padecía del mal de Alzheimer y estaba, por tanto, en un estado de absoluta vulnerabilidad intelectual y emocional, con sus facultades mentales y cognitivas deterioradas, la demandada Purificación Luque obtuvo un mandato general amplio, otorgado en la Notaría de Humberto Santelices Narducci, que otorgaba a la demandada un poder amplio para administrar y disponer de todos los bienes de su hermana, incluso con facultades para autocontratar. Dado el estado de salud en que se encontraba la mandante, es evidente que el referido mandato es nulo pues fue otorgado por una persona absolutamente incapaz.

En el ejercicio del mandato, prosigue, la demandada rescató inversiones en fondos mutuos del Banco Santander, por un monto aproximado de \$135.000.000.-, de los que era titular



Amalia Luque Sánchez. El destino de estos rescates habría sido la cuenta corriente número 636414, que mantenía en el mismo Banco Santander Amalia Luque Sánchez, sin embargo, una vez que los dineros ingresaron a la cuenta, la demandada retiró al menos \$135.000.000.- provenientes de los mencionados fondos mutuos, a través de la emisión de un vale vista, en marzo de 2019.

Agrega que el 20 de diciembre de 2016, Purificación Luque Sánchez, traslada a su hermana Amalia, a la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, y la compele a otorgar un nuevo testamento, a pesar del Alzheimer que padecía la causante a esa fecha, testamento en el que la nueva y única heredera universal de todos los bienes de la causante, fue su hermana Purificación.

Nota que en dicho testamento incluso figuran dos departamentos en la comuna de Ñuñoa que ya habían sido transferido, lo que demuestra que no se encontraba en su sano juicio.

Agrega que la única persona beneficiada adicionalmente por este testamento fue María Isabel Salazar Luque, a cuyo favor se instituyó un legado, sin que conste que tenga relación ni responsabilidad en los actos defraudatorios.

Explica que lo anterior fue posible porque, aproximadamente entre el año 2008 hasta el año 2019, la demandada de autos, vivió en la casa de su hermana, Amalia Luque, ubicada en calle Pedro Blanquier N°5.810, comuna de Las Condes. En tal contexto, la causante solventó los costos de vida, no solo de su hermana Purificación, sino también los



de las hijas de esta última, Claudia y Marisol, ambas Sepúlveda Luque.

Afirma que lo anterior consta en la causa RIT F-3799-2019, seguida ante el Centro de Medidas Cautelares, en la que se conoció una denuncia por Violencia Intrafamiliar interpuesta por una sobrina de doña Amalia, en la que consta un Informe del Departamento del Adulto Mayor de la Municipalidad de Las Condes, de fecha 15 de mayo de 2019, que concluye que existen indicios de abuso patrimonial.

Añade que producto del aprovechamiento y del negligente cuidado que recibía, el 26 de julio de 2019, doña Amalia sufre una caída que la lleva a internarse en la Clínica Alemana, donde el doctor permite darla de alta, bajo la condición de que estuviera cuidada por un adulto las 24 horas del día. Es así como la madre de Paula Rivera Luque (una de los demandantes), María Isabel Luque Sánchez, decide cuidar a su hermana Amalia, y la lleva a su domicilio. Así la familia en general pudo detectar el maltrato y los actos defraudatorios sufridos.

Por los hechos relatados, añade, se originó la querella interpuesta ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que se tramita con el RIT 9303-2019.

En cuanto al derecho, cita los artículos 1445, 1446, 1447, 1005 N°4 y 1006 del Código Civil, y agrega que, por regla general, todas las personas son hábiles para testar, sin embargo, el artículo 1005, establece las diversas causales de incapacidad. En su N°3 declara inhábil para testar al demente interdicto, razón por la que dicha causal



requiere la existencia del respectivo decreto de interdicción, sea éste provisorio o definitivo, y que el fundamento de tal declaración sea la demencia del testador y no otro motivo, como la disipación. En este caso, según lo dispone el artículo 465, no será necesario probar la demencia, bastando para ello acompañar el aludido decreto, pues la resolución que declara la interdicción constituye la prueba de la causal invocada. En el N°4, el legislador considera incapaz de testar al que *actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa*. En consecuencia, aquí quedan comprendidas todas las personas que, al momento de testar, por cualquier motivo, estén privadas de razón o de su sano juicio, lo que naturalmente incluye a los dementes que no estén declarados en interdicción por demencia provisoria o definitiva, como también los sujetos afectados por enfermedades mentales de diferente naturaleza o simplemente los privados del sano juicio por efecto de su avanzada edad o cualquier causa temporal.

Agrega que, conforme con los artículos 1681 y 1682 del Código Civil, los actos y contratos de los incapaces se sancionan con nulidad absoluta.

Finalmente, sostiene que los actos de Purificación Luque la hacen indigna para suceder, pues, conforme con el artículo 968 del Código Civil, que los actos de Purificación Luque, así se califica a quien *"por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto, o le impidió testar;"*.

Pide en definitiva declara la nulidad absoluta del mandato general otorgado por Amalia Luque a Purificación Luque, lo mismo el testamento de 20 de diciembre del 2016, y



declara la indignidad para suceder de la hermana Purificación Luque.

A folio 4, consta la notificación de la demanda a la demandada María Salazar, efectuada el 02 de marzo de 2021.

A folio 7, consta la notificación de la demanda a la demandada Purificación Luque, efectuada el 30 de marzo de 2021.

A folio 8, con fecha 21 de abril de 2021, comparece Jorge Munro Rivano, abogado en representación de la demandada Purificación Luque, quien viene en contestar la demanda solicitando su rechazo con costas.

Controvierte los hechos afirmados por la demandante, y seguidamente relata que, en la década de 1970, la causante Amalia Luque se radicó en Málaga. Tras enviudar la demandada en 1989, comenzó a viajar a acompañar a su hermana, y entre 1991 y 2002 pasó largas temporadas con ella, para ayudarla en el cuidado de su tía María Concepción Sánchez Luque, quien falleció en 2003, dejando designada heredera universal a Amalia Luque, quien así adquirió un patrimonio significativo.

A su regreso a Santiago, prosigue, ambas hermanas se instalaron a vivir gratuitamente en el inmueble ubicado en calle Ingeniero Pedro Blanquier 5800, comuna de Las Condes, la que era propiedad de la sucesión Sepúlveda Luque, conformada por la demandada y sus hijas. Aproximadamente en 2006, Amalia Luque compró el inmueble de su hermana María Luque, madre de la demandante, ubicado en Pedro Blanquier 5810, al que se trasladaron Purificación y Amalia, donde vivieron por aproximadamente 13 años.



Agrega que la demandada comenzó a arrendar el inmueble de Ingeniero Blanquier 5800, cuyas rentas se depositaban en la cuenta corriente del Banco Santander de su hermana Amalia, con quien compartía el uso de su propiedad ubicada en Playa de Mirasol, y el montepío de la demandada también se depositaba en la cuenta corriente de su hermana, en la que se acumularon los dineros de ambas y formaron una comunidad de vida y afectos, compartiendo gastos.

Añade que el primer mandato otorgado por la causante a su representada para que administrara libremente su cuenta corriente data de 2009, y que sus facultades fueron ampliadas en el instrumento del 27 de octubre de 2016. La misma situación ocurre respecto del primer testamento, en el que designa legataria y heredera a su hermana Purificación.

Sostiene que, mientras vivió con su representada, su hermana Amalia no fue diagnosticada con demencia, y se encontraba en buenas condiciones físicas y mentales a la época del otorgamiento de los actos impugnados, circunstancia que fue certificada por su médico de cabecera Yerko Arancibia, a lo que agrega que concurrió voluntariamente, sin ser *trasladada* ni *compelida*, y que su representada no conoce a los testigos del testamento.

Seguidamente, contesta la acción de nulidad de mandato, oponiendo en primer lugar excepción perentoria de falta de legitimación activa.

Afirma que, en caso de ser un tercero quien demanda la nulidad de un contrato, éste debe alegar y probar un interés patrimonial, que debe tener una relación estrecha con la



causa de nulidad, y debe ser cierto y no meramente hipotético, por lo que no es suficiente la mera expectativa de llegar a ser heredero. Asimismo, el interés debe ser actual, coetáneo y no sobreviniente a la celebración del acto.

Observa que los actores no tienen la calidad de herederos, dado que María Rivera, Bernardita Luque y Sergio Trautmann mencionan haber sido designados legatarios o herederos en un testamento de 2010, confesando judicialmente que dicho testamento no tiene vigencia al momento de demandar, por encontrarse revocado, mientras que, por su parte, la demandante Paula Rivera niega ser asignataria del testamento revocado. Por otra parte, prosigue, la circunstancia de que también interpongan una acción de nulidad contra el testamento de 20 de diciembre de 2016 no les otorga un interés cierto, pues al momento de deducirse la demanda de nulidad de mandato, no se ha dictado sentencia respecto de la acción de nulidad de testamento, por lo que constituye una mera expectativa, la que desaparecerá al rechazarse la acción.

Agrega que el que el interés deba ser legítimo implica que éste debe fundarse en un derecho actual, coetáneo y no sobreviviente a la celebración del acto que se pretende anular, y debe mantener actualidad a la fecha en que se pide la declaración de nulidad.

Explica que se discute si la *actualidad* de interés debe concurrir al momento otorgarse el acto impugnado o al interponerse la demanda, pero en la especie no concurre en ninguno de ambos momentos.



En segundo término, opone la excepción perentoria de Litis concesión pasiva necesaria o al menos de falta de legitimación pasiva, con fundamento en que, en materia de nulidad, la acción debe dirigirse contra todos los que intervinieron en el acto o contrato. En caso de haber fallecido una de las partes, debe demandarse a todos sus herederos. Así, en la especie debió demandarse a Purificación Luque como mandataria y como heredera de la mandante, sin embargo, la acción se deduce en su contra sólo en la primera calidad, lo que basta para el rechazo de la demanda.

Así, si hubieran demandado a su representada como mandataria de la mandante, reconocerían su calidad de tal, lo que conduciría al rechazo de la demanda por falta de legitimación activa y, por el contrario, al controvertir su condición de heredera, debieron demandar las personas que estiman ser tales, lo que tampoco hicieron.

En tercer lugar, sostiene que la acción de nulidad de mandato ha perdido oportunidad, pues el contrato se extinguió con anterioridad a la presentación de la demanda con la muerte de la mandante, por tratarse de un contrato intuitu personae. La acción de nulidad tiene por objeto privar de efectos al contrato que se encuentra produciéndolos, y no a un acto extinto.

En cuarto lugar, controvierte que la mandataria se encontrara demente al momento de contratar, y reitera lo señalado en la parte preliminar de su presentación.

En quinto lugar, niega que la causante se encontrara demente a partir de 2013, y sostiene que se podrá constatar



que, durante dicho período, dirigió personalmente complejas operaciones inmobiliarias y otros negocios.

En sexto lugar, afirma que, conforme con los artículos 1446 y 465 del Código Civil, se presume la capacidad, por lo que, al no existir decreto de interdicción, debe probarse por los actores que la mandante se encontraba demandante se encontraba demente al momento de otorgar el mandato.

Seguidamente contesta la demanda de nulidad de testamento, solicitando su rechazo.

En primer término, opone excepción de litisconsorcio activo necesario, con fundamento en el inciso segundo del artículo 3 del Código Civil, que la acción pertenecería a todas las personas señaladas como asignatarias en el testamento de 2010, quienes pueden ser alcanzadas por el fallo. De tal modo, la relación procesal no ha sido debidamente conformada, por lo que la demanda debe ser rechazada antes de conocer del fondo del asunto.

Por otra parte, agrega que sería absurdo que las personas que no concurrieron a demanda se beneficiaran de ser acogida la acción.

Sostiene que, de no desestimarse la acción, se vulneraría el principio de la bilateralidad de audiencia, b) la protección de los derechos de terceros por extensión de los efectos de la cosa juzgada, c) el principio de la relatividad de la sentencia incurriendo en la inutilidad de la sentencia, y d) la legitimación procesal, y que también las personas que no comparecieron podría autónomamente deducir nuevas demandas en caso de que se rechazara ésta,



haciendo inútil la sentencia, pudiendo llegarse al absurdo de que el acto sería nulo para algunos y válido para otros.

Afirma que, según la doctrina, el litisconsorcio necesario se trata, en esencia, de una única relación sustancial para varios sujetos, que en sede jurisdiccional necesita el concurso de los mismos a fin de que la decisión forme estado en orden a todos ellos. Por lo mismo, el objetivo del litisconsorcio necesario será obtener una resolución única para todos los litisconsortes.

En segundo lugar, afirma que la causante no se encontraba demente al 20 de diciembre de 2016, cuanto testó, y reitera lo ya señalado al respecto, a lo que agrega que lo propio de las personas que han perdido el juicio son los *actos demenciales*, atributo que no se puede predicar respecto de haber testado a favor de su hermana, conforme con los hechos ya relatados.

Explica a continuación que la causante sufrió una profunda decepción respecto de *María Francisca* y de *Sergio* (sic). En cuanto a éste, pese a que le permitió vivir gratuitamente en el inmueble de calle Lautaro, por su causa se vio involucrada en un grave asunto tributario, y en cuanto a aquélla, ni siquiera la consideró en el testamento de 2010, ni aún para el caso de que su madre muriera. Con Bernarda no tenía ningún tipo de relación.

En tercer y cuarto lugar, sostiene que el testador debe ser capaz al momento de testar, por lo que el testamento no pierde eficacia si el testador cae en alguna incapacidad con posterioridad.



En quinto lugar, afirma que, conforme con la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que cita, la demencia debe establecerse de manera total e irredargüible, acreditándose los síntomas de la demencia a la fecha del testamento. En esta materia, no caben aproximaciones, porque éstas traducen sólo un proceso en curso, en desarrollo, un estado cuasi anormal inidóneo para anular un testamento. Este último evento exige inhabilidad absoluta del testador por no estar en su sano juicio. Los signos de vejez, decrepitud, dolencias o decadencia física no conducen por sí solos ni necesariamente a la insanidad mental.

En sexto lugar, reitera que la causante no se encontraba demente al momento de testar.

En séptimo lugar, sostiene que existe una contradicción a los actos propios, pues, en el período en que se sostiene que la causante se encontraba demente, la demandante María Salazar recibió de aquélla cheques por la cantidad de \$174.739.547.-, mientras que la madre de la demandante Paula Luque hizo lo propio por la cantidad de \$75.000.000.-.

En octavo lugar, explica que existió un cambio de circunstancias entre 2010 y 2016, que justifica la decisión de la causante de cambiar su testamento.

Explica que los hermanos considerados en el testamento anterior habían fallecido. Asimismo, en el año 2014, Amalia había favorecido a distintos hermanos, donándole dineros provenientes de la venta realizada por la propia Amalia, el 10 de marzo de 2014, de su propiedad ubicada en Avenida Los Leones N° 710, comuna de Providencia. Además, Amalia había



girado cheque en favor de María Luque, por la suma \$75.000.000. Por su lado, a la demandante María Salazar, le había donado importantes sumas de dinero, que le habían permitido comprar un departamento propio, además de otros apoyos económicos. Asimismo, perdió la confianza en Hernán Rivera Muñoz, albacea designado en el testamento anterior, padre de la demandante Paula Rivera, a quien eximió de continuar con la administración de algunos arriendos que él se encargaba de cobrar, ya que se dejaba las rentas para sí.

En noveno lugar, sostiene que las pruebas invocadas para acreditar la demencia son irrelevantes.

En cuanto al certificado de la doctora María Behrens, sostiene que no ha sido reconocido por quien aparece suscribiéndolo, que diagnostica la enfermedad de Alzheimer casi tres años después del otorgamiento de los actos que se pretende anular, y que la facultativa conoció a la paciente el 30 de noviembre de 2019, por lo que, de comparecer, no podrá aseverar que ésta se encontraba inhabilitada el día 20 de diciembre de 2016. Por otra parte, en cuanto al presunto inicio de la enfermedad, se basa en la información o los dichos de los padres de la demandante Paula Rivera, quienes a la fecha ya habían deducido una querrela por estafa en contra de Purificación Luque.

En cuanto al informe social emitido por María Astudillo, sostiene que tampoco ha sido reconocido en el juicio por quien aparece otorgándolo, que ésta conoció a la causante recién el 08 de mayo de 2019, y que no evaluó su estado cognitivo. Tal documento fue acompañado en la causa F-3799-209, en la que se rechazó la demanda, y en materia penal,



donde se le restó mérito por el Juzgado de Garantía.

Afirma que en los autos RIT F-3799-209 del Centro de Medidas Cautelares se dictó sentencia el 18 de junio de 2019, rechazándose la demanda de violencia intrafamiliar. Posteriormente la demandante Bernarda Luque imputó nuevos maltratos a su representada, lo que dio origen a la causa RIT F-7504-2019 del Centro de Medidas Cautelares, juicio en el que, el 19 de octubre de 2019, Javiera Terroba Aguirre, curadora ad litem, se entrevistó personalmente con Amalia Luque, quien descartó la denuncia, expresando que no la ratificaba.

En cuanto a la querella criminal que se tramita ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, con el RIT O-9303-2019, señala que en la misma los testigos son los demandantes de esta causa, y que el propio Sergio Trautmann reconoce que no le consta el estado mental de Amalia Luque.

En dichos autos, la propia existe un documento fechado 25 de noviembre de 2019, que aparece suscrito por la propia Amalia Luque, quien otorga autorización al Fiscal del Ministerio Público para el levantamiento del secreto bancario de sus cuentas corrientes. A raíz de esto, se acogió por el tribunal la falta de legitimación activa de María Isabel Luque.

Finalmente, se refiere al decaimiento del estado de salud de Amalia Luque. Refiere que la convivencia con su representada fue terminada por su hermana María Isabel, con la excusa de que Amalia requería mayor cuidado, sin embargo, ello coincide con que ésta se había enterado de la revocación



del testamento anterior. La salud de la causante se deterioró a partir de entonces por causa del trauma que significó la separación de su hermana.

A continuación, contesta la demanda de indignidad sucesoria.

Sostiene que las causales de indignidad en un sistema de asignaciones forzosas tienen como fin evitar que herederos o legatarios que carezcan de mérito puedan llegar a suceder al causante. Estas causales de indignidad contemplan comportamientos que rompen las presunciones legales sobre las relaciones familiares que justifican las atribuciones sucesorias y, es por ello, que operan tanto en la sucesión testada como intestada.

Como primera defensa, opone la excepción de falta de legitimación activa de los demandantes, la que funda en que la indignidad sólo produce efectos si ha sido declarada judicialmente. En el presente caso, ninguno de los demandantes es heredero, pues las asignaciones de las que dicen ser titulares han sido revocadas por un testamento posterior, por lo que no tienen derecho alguno en la sucesión.

Abunda señalando que la demanda no tiene eficacia a favor de los demandantes, pues en la cláusula quinta del testamento, la causante estableció que, de faltar Purificación, ésta sería sustituida por sus hijas Claudia y María Soledad, ambas Sepúlveda Luque.

En segundo lugar, sostiene que las causales de indignidad son de carácter excepcional, de derecho estricto,



de interpretación restrictiva y no se pueden aplicar por analogía.

En tercer lugar, afirma que la causal de indignidad invocada no se condice con los hechos que se relacionan con el contrato de mandato y su ejecución.

En cuarto lugar, sostiene que no se configura la causal de indignidad invocada, y da por reproducidas sus alegaciones referidas a que la causante no se encontraba demente.

Agrega que la causante libremente concurrió por sus propios medios a otorgar testamento, sin ser *trasladada, compelida, forzada, obligada ni arrastrada* por su representada, quien no estuvo presente en dicha ocasión ni conoce a los testigos del testamento.

En quinto lugar, afirma que la demanda de nulidad de testamento es incompatible con la de indignidad, y ésta última no se dedujo en subsidio, mientras que el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil permite interponer en el mismo juicio dos o más acciones siempre que no sean incompatibles, a menos que se deduzcan una en subsidio de la otra.

Sostiene que la demanda de nulidad absoluta se sustenta en la presunta incapacidad absoluta de la causante, encontrándose supuestamente impedida de ejecutar el testamento, por estar demente y privada de toda razón. La demanda de indignidad, en cambio, sostiene que su representada obtuvo por fuerza o dolo su designación de heredera universal. La falta de voluntad del incapaz, es contraria y contradictoria, a la fuerza o dolo, pues ambas



suponen la existencia de voluntad, pero viciada.

A folio 9, comparece María Gómez Ramírez, abogada por la demandada María Isabel Salazar Luque, quien contesta la demanda solicitando su rechazo, con costas.

Luego de controvertir los hechos afirmados por la parte demandante opone la excepción de litisconsorcio activo necesario.

Explica que éste se funda en el efecto relativo de la sentencia, establecido en el artículo N°3 del Código Civil, razón por la cual la acción de nulidad de testamento debió intentarse forzosamente por todos los asignatarios testamentarios instituidos en el testamento del año 2010, para que todos ellos sean alcanzados por los efectos del fallo.

Explica a continuación que su representada era sobrina de la causante, quien, residiendo en España, de todos los sobrinos que ésta tenía, escogió a su más cercana sobrina, su representada, a quien mandó un pasaje, para que la acompañara y la ayudara en los trámites y quehaceres para desocupar el departamento en que habían vivido Amalia Luque y la tía de ésta, María Concepción Sánchez Luque, pues aquélla había decidido volver a Chile e instalarse en Santiago. Así fue como pasó una larga temporada con su tía, ayudándola desocupar el departamento y a vender las propiedades que había heredado de su tía.

De vuelta en Chile, prosigue, la relación con su tía se estrechó aún más, pues su representada la visitaba, la llamaba, y la llevaba a misa y al médico.



Afirma que la causante quería mucho a sus sobrinas María, Francisca y Pilar Salazar Luque, y siempre las ayudaba económicamente, por lo que no es extraño que al fallecimiento de la madre de su representada, le dejara en el nuevo testamento instituir a su favor el mismo legado que había dejado a su madre.

Agrega que su representada estaba enferma de cáncer y la causante pagó su operación, y que antes de testar había regalado un departamento a su sobrina Francisca.

Seguidamente, sostiene que la demanda de nulidad de testamento contiene pretensiones contradictorias. Observa que la demanda es ininteligible, pues se indica en forma vaga y genérica que la testadora era un incapaz absoluta, y que se incurre en una incongruencia al afirmarse que el testamento sería nulo de nulidad absoluta porque la testadora sería una persona a quien la ley declara absolutamente incapaz y a la vez sería nulo de nulidad relativa por concurrir vicios de la voluntad de fuerza y de dolo, siendo incompatibles ambas proposiciones, pues una persona en éste caso la testadora no puede carecer de voluntad y al mismo tiempo conservarla, incongruencia que afecta incluso el petitorio y que ejemplifica con diversas citas del libelo.

Sostiene que la demanda debe ser rechazada, ya que por una parte omite información absolutamente relevante para una adecuada inteligencia de los hechos que imputa y, por otra parte incurre en contradicciones y peticiones incompatibles que se anulan entre sí por ley de la lógica y que procesalmente conducen al rechazo de la demanda, pues el juez no puede modificar los hechos de la demanda, no puede cambiar



el fundamento de hecho de la causa de pedir y del objeto pedido, bajo sanción de incurrir en vicio de ultra petita o extra petita, o en general infracción al principio de congruencia procesal, por lo tanto, no puede elegir entre la pretensión de nulidad absoluta por incapacidad absoluta por demencia y la pretensión de nulidad relativa por vicio del consentimiento por fuerza o por dolo, sino que sólo cabe rechazar la demanda completa. En el mismo sentido, destaca el principio de congruencia procesal que debe existir entre los fundamentos de hecho de la demanda, o sea, causa de pedir y objeto pedido, que a su vez determinan el contenido de la contestación de la demanda, la prueba y lo resolutivo de la sentencia.

Agrega que no se señalan hechos ni circunstancias que demuestren que la testadora se encontraba en estado de demencia, y que tampoco concurrieron los vicios de la voluntad que se alegan conjuntamente, los que se enuncian, pero que tampoco contienen fundamentos de hecho concretos, que puedan ser calificados por el tribunal.

Finalmente, afirma que, conforme con el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, no pueden entablarse acciones incompatibles, lo que conduce al rechazo de la demanda en su totalidad, a lo que agrega que la demanda de nulidad del testamento y la demanda de indignidad para suceder a la testadora por la causal establecida en el artículo 968 N° 4 del Código Civil se plantean en la misma forma, que la nulidad absoluta por incapacidad absoluta y la nulidad relativa por vicio del consentimiento, o sea, conjuntamente en el mismo juicio siendo incompatibles, por lo que la



demanda deberá ser rechazada también por éste motivo.

A folio 12, la demandante viene en evacuar la réplica, ratificando lo ya expuesto en la demanda.

Respecto de la contestación de la demandada María Salazar Luque, sostiene primeramente que la causante no era cercana sólo a ésta, sino que también a toda la familia.

Agrega que la demandada contradice en la contestación de la demanda su declaración que consta en las páginas 31 a 33 de la carpeta investigativa de la Causa RUC 1910045090-1, de la que cita extensos pasajes, en la que manifestó que la causante, a la fecha del mandato de 27 de octubre de 2016, y a la fecha del testamento, de diciembre del mismo año, no tenía conciencia de sus actos, olvidando los asuntos sencillos, y también los complejos, y que incluso no jugaba a las cartas desde mayo de 2015, pues olvidaba lo que tenía que hacer. Asimismo, se corroboran los hechos que se imputan a Purificación Luque.

En la misma declaración, prosigue, María Salazar consigna que su número de celular es el +56996840193, y añade que en un intercambio de mensajes a través de la aplicación *WhatsApp*, en un *chat* grupal de los primos de apellido Luque, denominados *Primos Sintonizados* expone que *"Ella firmó eso pensando que estaba por vencer el testamento que había dejado. No tiene idea que revocó el anterior"*. En otro *chat* denominado *Operación Testamento*, califica como mula al segundo testamento, y agrega que *"para entonces ya se habían vendido esas propiedades... sólo que con el apuro de la Marisol, no reparó en ese pequeño detallito"*.



Finalmente, afirma que los antecedentes aportados no pueden considerarse vagos ni genéricos, pues la codemandada reconoce prácticamente todos los hechos expuestos en la demanda.

Seguidamente, se refiere a la contestación de la demandada Purificación Luque.

Niega que la causante haya sido acompañada por la demandada en España, lo que fue corroborado por diversas personas que viajaron a ese país en 1990, 1997, 1998 y 1999.

Afirma que la causante siempre fue generosa con toda su familia, y no sólo con una de sus hermanas, y que el trato que ésta le dispensó estuvo lejos de ser aquél que se observa en una relación fraterna de cariño y hermandad.

Sostiene que no parece sensato otorgar mayor crédito al certificado médico extendido por un cardiólogo, como hace la demandada, y sostiene que no es necesario que una persona deba actuar escandalosamente para determinarse que tiene sus facultades cognitivas alteradas, es común que personas en tales condiciones muestren una apariencia de normalidad que no es tal. Lo anterior en un contexto de una conversación rutinaria, no abstrusa, ni por un período largo de tiempo. Este fenómeno es conocido en la psiquiatría como la *máscara social*.

De la circunstancia que, en el testamento, la causante disponga que un bien que ya había sido transferido, deduce que ésta no era consciente de lo que hacía, y que testamento fue inducido por una persona que desconocía la transferencia.

A continuación, se refiere a las alegaciones jurídicas



de las demandadas.

En cuanto a la excepción de litisconsorcio activo necesario, sostiene que en el caso de autos, y de la nulidad en general, efectivamente se configura un litisconsorcio necesario, pero pasivo, pues es jurídicamente imposible que los efectos de retrotraer las cosas al estado anterior a la celebración del acto o contrato previstos en los arts. 1687 y 1689 del Código Civil, perjudique a la contraparte o a terceros que no han sido llamados a juicio, sin embargo, no puede haber un litisconsorcio necesario activo y, de haberlo, la oportunidad para oponer dicha excepción ya precluyó, pues dispone el inciso primero del artículo 21 del Código de Procedimiento Civil que *"Si la acción ejercida por alguna persona corresponde también a otra u otras personas determinadas, podrán los demandados pedir que se ponga la demanda en conocimiento de las que no hayan ocurrido a entablarla, quienes deberán expresar en el término de emplazamiento si se adhieren a ella"*, de lo que se desprende que es una excepción dilatoria del N°4 o del N°6 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil pues busca corregir el procedimiento sin afectar al fondo de la acción deducida, y como tal, debe oponerse como incidente dentro del término de emplazamiento, antes de hacer cualquier gestión principal en el pleito, como dispone el artículo 305 del mismo cuerpo legal.

Asimismo, prosigue, pedir que la acción se ponga en conocimiento de terceros a quienes ésta pudiera corresponder es facultativo para el demandado, por lo que no es una obligación para el demandante, por lo que su acción no está



condicionada por el sólo hecho de corresponderle también a terceros que no han ocurrido a entablarla.

Añade que el litisconsorcio puede ser necesario o facultativo según si la presencia de la multiplicidad de sujetos en posición de demandantes o demandados sea o no una condición necesaria y obligatoria del proceso, y que el necesario, que no es el caso, puede ser propio o según si la Ley lo señala o no expresamente.

Sostiene que la norma de fondo es el artículo 1683 del Código Civil, confiere la acción de nulidad absoluta a todo el que tenga interés en ello, sin imponer que todos los posibles interesados deban actuar conjuntamente. Sostener lo contrario conduce al absurdo de que no podría deducirse la demanda si tan sólo uno de los titulares de la acción decide no ejercerla, privando a todos los demás de su derecho. Asimismo, la única disposición cerca del artículo 1690 del mismo cuerpo legal, que no establece un litisconsorcio activo necesario, sino que establece que la nulidad declarada en favor de un contratante no aprovecha al otro, revelando, por el contrario, que la intervención del otro interesado como demandante es opcional.

Abunda señalando que la alegación de su contraria no tiene sentido, pues en la comunidad hereditaria formada en virtud del testamento de 2010, existe un mandato tácito y recíproco entre los comuneros -entre ellos las personas naturales que comparecen como demandantes- para ejercer actos de conservación de la herencia, entre ellos, deducir demanda de nulidad respecto del testamento de 2016, lo que se desprende de los artículos 2305 y 2081 del Código Civil.



En relación con lo anterior, añade que la tesis de la demandada Purificación Luque, consistente en que debió haber sido demandada tanto en calidad de mandataria como de heredera, y que por no haberlo hecho debe rechazarse la demanda, pues habrían debido los actores demandar a quienes serían continuadores legales de la mandante, conduce a que los demandante debieron demandarse a sí mismos.

Respecto a la incompatibilidad de las pretensiones, afirma que no es incompatible pedir la nulidad absoluta de un testamento si el testador es absolutamente incapaz y al mismo tiempo la indignidad sucesoria del asignatario que por fuerza o dolo obtuvo una disposición testamentaria en su favor en dicho testamento. No es acertado fundamentar la supuesta incompatibilidad o contradicción en que al testador incapaz falta la voluntad y que la fuerza o dolo que configuran la indignidad suponen que esa voluntad existe, pero viciada. El incapaz absoluto, sea demente, impúber o sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente, manifiesta una apariencia de voluntad, que como tal, no es consciente y verdadera, dada la falta de discernimiento, por ello es jurídicamente ineficaz. Pero nada impide que esa apariencia de voluntad, además, haya sido inducida por fuerza o dolo.

Respecto de la falta de legitimación activa, señala que Purificación Luque es heredera aparente, pues deriva sus derechos de un testamento viciado de nulidad, mientras que los demandantes fundan su interés en el hecho de ser los reales y verdaderos sucesores de Amalia Luque, en virtud del testamento de 2010, calidad en la que pueden instar por la nulidad de los actos que haya otorgado la causante.



Sostiene también que es inútil que la demandada aluda a que se le haya concedido la posesión efectiva, ésta se le concede a quien presenta un testamento aparentemente válido, conforme con los artículos 877 y 704 del Código Civil. Así, la posesión efectiva no es un trámite que se caracterice por determinar si el solicitante de la misma es efectivamente heredero.

Añade que los demandantes tienen también interés porque, declarada la nulidad, se producirán los efectos del art. 1687 y 1688 del Código Civil, quedando incluso la mandataria obligada a indemnizar perjuicios a la sucesión si ha procedido de mala fe, esto es, conociendo o debiendo conocer de la demencia que afectaba a la mandante.

Afirma que es legítimo contradictor en el juicio de nulidad de un testamento que revoca a otro, un legatario establecido en el testamento revocado, y que la tesis de su demandada conduce a que jamás un asignatario testamentario podría demandar la nulidad de un testamento posterior que lo perjudique, por evidentes y ostensibles que fueren los vicios de que adolece.

Afirma que tampoco es sostenible que, previo a demandar la nulidad del mandato de 2016, los actores deban obtener sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del testamento, y que, pudiendo tener interés un tercero que pudiera obtener de la declaración de nulidad consecuencias que le son patrimonialmente beneficiosas, no es posible discutir el hecho que la nulidad del testamento de 2016 genera consecuencias favorables a los herederos y legatarios testamentarios del 2010, lo mismo en relación con el mandato



de 2016.

Finalmente, afirma que la acción de nulidad no pierde oportunidad por la muerte del mandante, pues la nulidad produce sus efectos retroactivamente, a diferencia de la terminación, de modo que interesa a los actores la declaración de nulidad, a fin de que se apliquen en toda su magnitud y extensión los efectos legales de la misma, como si tal contrato nunca se hubiere celebrado, más los perjuicios que eventualmente se acrediten.

En relación con la incapacidad de la causante, señala que el hecho de no haberse encontrado en su sano juicio al momento de testar puede ser probado también por presunciones.

Sostiene también que la causante, como la mayoría o todas las personas con sus facultades disminuidas, podía manifestar una apariencia de voluntad, la que, en todo caso, no le pertenecía, no siendo plenamente consciente de lo que hacía, condición que permitió a la demandada apoderarse completamente y ejercer dominación total sobre la persona y los bienes de doña Amalia Luque.

Finalmente, sostiene que los hechos que se señalan como motivo para modificar el testamento de 2010 son falsos, inverosímiles e incoherentes.

A folio 14 el abogado Jorge Munro viene en evacuar la dúplica por la demandada Purificación Luque, ratificando lo expuesto en la contestación y controvirtiendo lo señalado en la réplica.

En cuanto a las declaraciones de su codemandada María Salazar ante la policía, citadas por la demandante, señala



que ésta no es médico como para calificar el estado mental de una persona, que contestó la demanda oponiéndose a la misma, y que, aún en el caso que se allanara, ello carecería de efectos en autos, dado que existe una litisconsorcio pasiva obligatoria.

Agrega que las conversaciones mediante la plataforma WhatsApp fueron creados por los propios demandantes para coordinarse entre sí, y que nada prueban.

Niega haber incurrido en maltratos hacia la causante, y sostiene que las denuncias de violencia intrafamiliar interpuestas en su contra fueron desestimadas.

Atribuye a un error de referencia del abogado redactor el haber incluido entre las propiedades de la causante una que había sido enajenada, y afirma que ello no anula el testamento ni puede ser prueba del estado mental de la causante al momento de testar. Así, sostiene que la conclusión a la que llega la demandante es contradictoria, pues cambia la tesis planteada en la demanda, pues ahora sería un tercero quien habría inducido a testar, y también, si la causante estaba demente, no podría haber sido engañada, al carecer de consentimiento (sic).

En cuanto a la nulidad de testamento, agregó a su anterior argumentación que, en el caso de la comunidad hereditaria, la jurisprudencia ha reconocido la existencia de un litisconsorcio activo necesario, y cita ejemplos referidos a acciones rescisorias y reivindicatorias.

Finalmente, afirma que no se configura el mandato tácito y recíproco de administración de los comuneros establecido en



el artículo 2081 en relación con el artículo 2305 del Código Civil pues, en primer lugar, los demandantes no son herederos, y en segundo, las acciones interpuestas no constituyen actos de administración. Agrega que, si los actores perdieran el juicio, el resto de los demandados se vería afectado por un juicio en que no fueron parte, y que la remisión del artículo 2305 no alcanza a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 2081 del Código Civil, cuestión que además reafirma el artículo 2037 del mismo texto legal que señala que las deudas contraídas en pro de la comunidad no obligan sino al comunero que la contrajo, el que tendrá acción de reembolso en contra de la comunidad. Así, si existiera mandato, todos los comuneros quedarían obligados por el acto del mandatario, y el artículo 2307 dispone precisamente lo contrario.

En cuanto al estado de salud de la causante, enumera 10 escrituras públicas otorgadas por ella entre el 10 de octubre de 2013 y el 20 de diciembre de 2016, otorgadas ante cinco notarios públicos distintos, lo que no podría haber sido realizado por una persona demente.

Agrega que la causante fue requerida de pago el 07 de mayo de 2015 en un juicio tributario, en el cual se defendió activamente junto a sus asesores.

Asimismo, prosigue, en el mismo período firmaba cheques, contrataba asesores, realizaba sus pagos, contrataba asesores inmobiliarios, legales, contables, llevando su contabilidad, pagando impuestos, realizando declaraciones juradas, pudiendo desenvolverse comercialmente sin ningún tipo de inconvenientes, compareciendo personalmente al Banco a



realizar inversiones, firmando de su puño y letra los aportes y rescates de fondos mutuos, todos actos ejecutados por ellas y ninguno de ellos impugnados por los demandantes.

En cuanto a la acción de indignidad sucesoria, observa que la demandante cambia su relato, pues ya no habría sido su representada quien habría compelido a testar a la causante, sino que lo habría ejecutado junto a sus hijas Claudia y Marisol, a quienes no demanda. Luego, señala en la página 11 que el testamento habría sido supuestamente elaborado por otra persona. Para finalmente, en la página 14 de la réplica, sostener que el testamento habría sido inducido no por Purificación, ni su hija Claudia y tampoco Marisol, sino que un tercero, a quien ni siquiera individualiza. Añade que las hijas de su representada viven en Valdivia y en Estados Unidos.

A folio 15, María Inés Gómez, abogada por la demandada María Salazar, evacúa la dúplica.

Explica que su representada fue manipulada, utilizada y presionada durante meses por sus familiares, descontentos con el testamento, quienes le hicieron creer situaciones que no eran reales, al punto de que no comprender la calidad procesal que tenía en éste juicio y tampoco en el juicio penal, no comprendía que ella misma estaba siendo demandada y que en las reuniones donde asistió sola, sin abogado, sus expresiones podrían usarse en el juicio en su contra, como ocurrió y tampoco entendió que había sido despojada de su legado. Se la convenció de notificarse de la medida prejudicial precautoria, se le pidió su clave única nacional y asesorándola por teléfono para ingresar a la oficina



judicial virtual y los pasos que tenía que seguir para notificarse. Ello explica los dichos de su representada, que la parte demandante descontextualiza.

Ejemplifica tales manipulaciones citando conversaciones sostenidas mediante la plataforma WhatsApp.

A folio 20 consta la celebración de la audiencia de conciliación, que no prosperó.

A folio 21 se recibió la causa a prueba.

A folio 187 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LAS OBJECCIÓN DOCUMENTAL:

PRIMERO: Que, a folio 110, la demandada María Salazar viene en objetar los documentos acompañados por la demandante a folios 68 y 72.

Respecto del documento de folio 68, denominado "Copia de Informe Policial N° 20200293241/02442", lo objeta por tratarse de un documento emanado de un tercero que sería un subcomisario de la PDI, de nombre Juan Godoy Díaz, no obstante no firma su informe, convirtiéndolo en un documento apócrifo de un tercero quien tampoco compareció como testigo a reconocerlo, por lo tanto, no se le puede dar valor probatorio alguno.

En cuanto al documento de folio 68 denominado "impresión de WhatsApp de fecha 06 de febrero de 2019", lo objeta por falta de integridad, puesto que no se ha acompañado el *chat* completo, que consta de conversaciones escritas, registros de audio y documentos adjuntos.



En cuanto al documento de folio 72 denominado consistente en copia autorizada de escritura pública otorgada la Notaría de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, de fecha 17 de agosto de 2021, repertorio N° 12.778-2021, denominada "RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO Y FIRMA BEHRENS PELLEGRINO, MARÍA ISABEL", lo objeta por cuanto el informe que se acompaña, referido a Amalia Luque, y el acto del pretendido reconocimiento de éste por medio de la escritura pública de marras, porque el mencionado informe emana de un tercero que no ha comparecido en el juicio a reconocerlo al juicio, no pudiendo pretender hacerlo en la forma prevista en el Artículo 346 N° 2 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que de acuerdo con el tenor literal o texto de dicha disposición, la doctrina procesal e invariable jurisprudencia el Artículo 346 se aplica a los instrumentos privados emanados de las partes contra quien se hacen y no a terceros, cuya única forma de autenticarlos es mediante la comparecencia del otorgante como testigo, única forma de respetar la bilateralidad de la audiencia.

SEGUNDO: Que, conferido traslado, la demandante lo evacúa solicitando el rechazo del incidente.

En cuanto al primer documento, señala que, al objetar el documento, la propia demandada reconoce haber efectuado las declaraciones que constan en el informe policial.

Respecto del segundo documento, sostiene que no puede prosperar la objeción, pues el documento no se singularizó como toda la conversación de un grupo determinado, sino como el mensaje específico de fecha 6 de febrero de 2019, y que según sus propias afirmaciones corresponde a lo expresado por



la codemandada.

En cuanto al tercer documento, señala que, conforme con el N°2 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, los instrumentos privados se tendrán por reconocidos cuando igual declaración -el reconocimiento- se ha hecho en un instrumento público o en un juicio diverso.

TERCERO: Que, sin perjuicio del mérito probatorio que se asignará a los instrumentos respectivos, se desestimarán las objeciones opuestas a su respecto.

En cuanto al primer instrumento, se rechazará, por cuanto el informe policial acompañado es copia de un instrumento público que, conforme con el número 3 del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, sólo puede ser objetada como inexacta, causal que no ha sido invocada por la demandada.

Respecto del segundo instrumento, se desestimaré la objeción toda vez que éste consiste en un mensaje electrónico específico que, sin perjuicio de que su contextualización con otras comunicaciones puede permitir una mejor comprensión del mismo, constituye un instrumento íntegro en sí mismo.

En cuanto al tercer instrumento, consistente en una escritura pública de reconocimiento de un informe médico, se desestimaré también la objeción, pues el reconocimiento de un instrumento privado mediante una declaración efectuada por el otorgante en un instrumento público es aceptado expresamente por el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, cuya tenor literal no admite otras interpretaciones.

En definitiva, lo que pretendió la demandada fue



restarle valor probatorio a los documentos acompañados, cuestión que es propia del juez del fondo al analizar la prueba ofrecida.

II.- EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD DE TESTAMENTO:

CUARTO: Que, a folio 1, comparece **Tomás Ruiz Tagle Barros**, abogado, en representación convencional de **MARÍA FRANCISCA SALAZAR LUQUE, BERNARDITA ADRIANA GEMA LUQUE GUITART, PAULA RIVERA LUQUE, y SERGIO ARTURO TRAUTMANN LUQUE**, deduciendo demanda de nulidad de contrato, nulidad de testamento y declaración de indignidad para suceder en procedimiento ordinario, en contra de **PURIFICACIÓN LUQUE SÁNCHEZ**, y contra de **MARÍA ISABEL SALAZAR LUQUE**, con la finalidad de que se declare: 1) que el mandato general otorgado por Amalia Luque Sánchez a Purificación Luque Sánchez, en escritura pública de fecha 27 de octubre de 2016, otorgada en la Notaría de Humberto Santelices Narducci, número de repertorio 11.586/2016, es nulo de nulidad absoluta, por haber sido otorgado por una persona absolutamente incapaz; 2) que el testamento otorgado por doña AMALIA LUQUE SÁNCHEZ, en escritura pública de fecha 20 de diciembre de 2016, en la Notaría de Santiago de Patricio Raby Benavente, número de repertorio 14.405/2016, es nulo de nulidad absoluta, por haber sido otorgado por una persona absolutamente incapaz y, en consecuencia, debe quedar sin efecto su inscripción; 3) que Purificación Luque Sánchez, es indigna de suceder como heredera a su hermana, Amalia Luque Sánchez, por haber obtenido dolosamente disposiciones testamentarias de la difunta, al haberla compelido a otorgar el testamento singularizado bajo el (ii) precedente, a pesar



de padecer la causante de la enfermedad de Alzheimer ;y 4) se condene en costas solamente a Purificación Luque Sánchez, con los fundamentos de hecho y derecho ya señalados en la parte expositiva.

QUINTO: Que las partes demandadas contestaron la demanda solicitando su rechazo, y se evacuaron los trámites de réplica y dúplica con los fundamentos ya reseñados.

SEXTO: Que con el objeto de justificar sus dichos la demandante rindió la siguiente prueba:

Instrumental

A folio 3 del cuaderno de medida prejudicial:

1) Certificados de nacimiento de Amalia Luque Sánchez, María Luque Sánchez, de Purificación Luque Sánchez y de Claudia Sepúlveda Luque.

2) Certificado de defunción de Amalia Luque Sánchez.

3) Copia autorizada de escritura pública correspondiente a la notaría RAUL IVAN PERRY PEFAUR, de fecha 26 de noviembre de 2010, repertorio 50408, y que corresponde a TESTAMENTO SOLEMNE ABIERTO de Amalia Luque Sánchez.

4) Copia autorizada de escritura pública correspondiente a la notaría PATRICIO RABY, de fecha 20-12-2016, repertorio 14405, y que corresponde a TESTAMENTO de Amalia Luque Sánchez.

5) Copia autorizada de escritura pública correspondiente a la notaría HUMBERTO SANTELICES, de fecha 27 de octubre de 2016, repertorio 11586, y que corresponde a MANDATO GENERAL AMPLIO de Luque Sánchez, Amalia, a Luque Sánchez,



Purificación.

6) Copia de informe evacuado el 30 de noviembre de 2019 por la neuróloga María Isabel Behrens.

7) Copia de informe de María Teresa Astudillo Vallejos, asistente social del Departamento del Adulto Mayor de la Municipalidad de Las Condes, de fecha 15 de mayo de 2019.

8) Certificados de dominio vigente de las inscripciones de fojas 45273, N°44101, del año 2005, de fojas 45274, N°44103 del año 2005; de fojas 56944, N°93037 del año 2006; de fojas 14114, N°22887 del año 2006; y del 50% de los derechos sobre el inmueble inscrito a fojas 67848, N°59263 del año 1991, todas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

9) Certificados de avalúo fiscal de las propiedades de ubicadas en Calle Carlos Wilson N°1340, comuna de Providencia; en calle Curicó N°246, comuna de Santiago; en calle Ingeniero Pedro Blanquier N°5790, comuna de Las Condes; en calle Ingeniero Pedro Blanquier N°5810, comuna de Las Condes; y en calle Lautaro N°660, comuna de Providencia.

10) Dos certificados emitidos con fecha 06 de julio de 2020 por Claudia Medina Tapia, ejecutiva del Banco Santander.

11) Certificado de extendido por la Administradora General de Fondos del Banco Santander Chile, de fecha 3 de julio de 2020.

12) Copia de correo electrónico enviado con fecha 03 de agosto de 2019 desde la casilla puritaluque@gmail.com a la casilla ana.martinez@santander.cl.



13) Copia de cartola de la cuenta corriente del Banco Santander Chile N°8091080, del periodo del 28 de diciembre de 2018 al 28 de enero de 2019, de Amalia Luque.

14) Copia de correo electrónico enviado con fecha 30 de junio de 2019 desde la casilla mensajes@santander.cl a puritaluque@gmail.com.

15) Copia de correo electrónico enviado con fecha 28 de febrero de 2019 desde la casilla puritaluque@gmail.com a andrea.abuhadba@santander.cl.

16) Copia de cartola de la cuenta corriente de Amalia Luque en el Banco Santander, N°06-36414-4, del período comprendido entre el 28 de febrero y el 28 de marzo de 2019.

17) Copia de documento denominado "Cartola Movimiento de Fondos Mutuos" extendido por el Banco Santander, y que comprende el período de agosto del año 2019.

18) Copia de querella criminal deducida ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 9303-2019, y de resolución que le da curso.

A folio 23 del cuaderno de medida prejudicial:

19) Copia de promesa de compraventa de derechos hereditarios de María Isabel Luque Sánchez a Paula Isabel Rivera Luque, de fecha 26 de agosto de 2020.

A folio 68:

1) Copia de Informe Policial N° 20200293241/02442, de fecha 30 de junio de 2020, de la causa RUC 1910045090-1.

2) Captura de pantalla de mensaje de WhatsApp denominado "Primos Sintonizados", de fecha 06 de febrero de



2019.

3) Captura de pantalla de mensaje de WhatsApp denominado "Operación Testamento", de fecha 12 de octubre de 2020.

4) Copia de inscripción de fojas 27.038, número 40.058, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2015.

A folio 69:

5) Copia autorizada de escritura pública de compraventa y alzamiento de Purificación Luque a Inversiones Toltén, otorgada en la Notaría de Álvaro González Salinas con fecha 14 de marzo de 2019, repertorio N°14.309.

6) Copia de inscripción de dominio de fojas 71560, número 104097, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2019.

7) Copia de inscripción de dominio de fojas 321 vuelta, número 334, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, correspondiente al año 2016.

8) Copia de inscripción de dominio de fojas 1837, número 1757, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, correspondiente al año 2018.

9) Copia de inscripción de dominio de fojas 1298, número 1180, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, correspondiente al año 2020.

10) Copia de inscripción de dominio de fojas 1471, número 1338, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, correspondiente al año 2021.



11) Copia autorizada de escritura pública de cesión de derechos hereditarios de Luque Sánchez, María Isabel, a Rivera Luque, Paula Isabel, de fecha 29 de diciembre de 2020, otorgada en la Notaría de Roberto Cifuentes Allel, repertorio 11953-2020.

A folio 72:

12) Copia con firma electrónica avanzada de escritura pública de Reconocimiento de Documento y Firma Behrens Pellegrino María Isabel, otorgada con fecha 17 de agosto de 2021 en la notaría de Roberto Cifuentes Allel, repertorio 12.778-2021.

Oficios:

1) A folios 37, 38 y 39, oficio del Banco Santander Chile N°445, que adjunta copia íntegra de todos los documentos que acreditan la situación patrimonial de al causante al año 2016, y copia de las comunicaciones enviadas por la demandada Purificación Luque en su representación.

2) A folio 94, oficio de la Clínica Alemana que adjunta exámenes y test neurocognitivos practicados para evaluar su estado cognitivo.

Pericial:

1) A folio 168, informe evacuado por el perito neurólogo Carlos Silva Rosas.

SÉPTIMO: Que, la demandada Purificación Luque se valió de los siguientes medios probatorios en autos:

Instrumental

A folio 18 del cuaderno de medida prejudicial:



1) Copia de certificado médico emitido por Yerko Arancibia Alfaro, de fecha 24 de octubre de 2016.

2) Copia de autorización de alzamiento de secreto bancario emitida por Amalia Luque en la causa RUC1910045090-1, con fecha 25 de noviembre de 2019.

3) Copia de sentencia dictada en los autos RIT F-7504-2019 del Centro de Medidas Cautelares de Santiago.

4) Copia de sentencia dictada en los autos RIT F-3799-2019 del Centro de Medidas Cautelares de Santiago.

A folios 55 y 56:

1) Copia autorizada de escritura pública correspondiente a la notaría IVAN TORREALBA ACEVEDO, de fecha 10 de octubre de 2013, repertorio 15379, y que corresponde a Promesa de Compraventa de Luque Sánchez, Amalia, a Inmobiliaria e Inversiones Palermo Chile S.A.

2) Copia de instrucciones notariales N°11311, de fecha 10 de octubre de 2013, de Amalia Luque e Inversiones Palermo Chile S.A. al Notario Iván Pedro Torrealba.

3) Copia de declaración jurada notarial de Amalia Luque, de fecha 22 de octubre de 2013.

4) Copia autorizada de escritura pública correspondiente a la notaría de HUMBERTO SANTELICES, de fecha 04 de noviembre de 2013, repertorio 11769, y que corresponde a PRORROGA DE PLAZO de Luque Sánchez, Amalia, a Inmobiliaria Palermo e Inversiones Chile S.A.

5) Copia autorizada de escritura pública correspondiente a la notaría IVAN TORREALBA, de fecha 13 de



diciembre de 2013, repertorio 19546, y que corresponde a MODIFICACION Y PRORROGA DE PROMESA DE COMPRAVENTA, de Amalia Luque Sánchez a Inmobiliaria Palermo e Inversiones Chile S.A.

6) Copia autorizada de escritura pública correspondiente a la notaría PATRICIO RABY BENAVENTE, de fecha 10 de marzo de 2014, repertorio 2880, y que corresponde a COMPRAVENTA de Amalia Luque Sánchez a Inmobiliaria Metro Los Leones SpA.

7) Copia de instrucciones notariales N°189-2014 de fecha 10 de marzo de 2014, de Amalia Luque e Inmobiliaria e Inmobiliaria Metro Los Leones SpA al notario Patricio Raby Benavente.

8) Copia autorizada de escritura pública correspondiente a la notaría JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, de fecha 07 de abril de 2015, repertorio 11212, y que corresponde a COMPRAVENTA de Mario Rubén Barrientos y Amalia Luque Sánchez.

9) Copia de instrucciones notariales N°911, de fecha 07 de abril de 2015, de Amalia Luque y Mario Reyes al notario Juan Ricardo San Martín Urrejola.

10) Copia de cédula de identidad de la causante.

11) Copia de solicitud y comprobante de Rescate de Fondo Mutuo Santander Money Market Dólar Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos, N°23049627, de fecha 24 de abril de 2015, efectuado por la causante.

12) Copia de solicitud y comprobante de Rescate de Fondo Mutuo Santander Money Market Dólar Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos, N°23138239,



de fecha 24 de junio de 2015, efectuado por la causante.

13) Copia de mandamiento de ejecución y embargo dictado contra la causante el 07 de mayo de 2015 por la Tesorería Regional Metropolitana Santiago Oriente, y requerimiento de pago de fecha 02 de julio de 2015.

14) Copia de Solicitud y Comprobante de Aporte Fondos Mutuos Santander Select Prudente Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos N°32.018.367, efectuado por la causante el 20 de agosto de 2015.

15) Copia de Solicitud y Comprobante de Aporte Fondos Mutuos Santander Select Prudente Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos N°32.018.499, efectuado por la causante el 20 de agosto de 2015.

16) Copia de comprobante de pago a Tesorería de fecha 28 de octubre de 2015, por la cantidad de \$125.819.757.

17) Copia de comprobante de pago a Tesorería, por la cantidad de \$146.573.142.

18) Copia de Solicitud y Comprobante de Aporte Fondos Mutuos Santander Select Prudente Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos N°32.441.680, efectuado por la causante el 23 de diciembre de 2015.

19) Copia de Certificado N° 21 Sobre Mayor o Menor Valor Obtenido en el Rescate de Cuotas de Fondos Mutuos no Acogidas a las Normas de los Artículos 42 Bis y 57 Bis de la Ley de la Renta, Adquiridas con Posterioridad al 19 de Abril del Año 2001, N°35.147 y, de fecha 01 de abril de 2016.

20) Copia de declaración de impuesto a la renta de la



causante N° 238624426, año tributario 2016.

21) Copia de boleta de ventas y servicios N°00114, girada contra la causante con fecha 03 de mayo de 2016, por E&V Servicios Corporativos Limitada, por Asesoría Renta AT 2016.

22) Carta poder de Amalia Luque a Joaquín Casarino, autorizada con fecha 28 de julio de 2016 por Lilia Sierra Mejía, notario reemplazante de la 1° Notaría de Las Condes.

23) Certificado de viajes de la causante, emitido por la Policía de Investigaciones con fecha 06 de octubre de 2016.

24) Copia de DNI español de la causante, legalizada en la 10° Notaría de Ñuñoa, el 07 de octubre de 2016.

25) Copia de pasaporte de la causante, legalizado en la 10° Notaría de Ñuñoa, el 07 de octubre de 2016.

26) Copia autorizada de escritura pública correspondiente a la notaría HUMBERTO SANTELICES, de fecha 27 de octubre de 2016, repertorio 11586, y que corresponde a MANDATO GENERAL AMPLIO de Luque Sánchez, Amalia, a Luque Sánchez, Purificación.

27) Copia autorizada de protocolización Repertorio 11.585-2016, efectuada en la notaría de Humberto Santelices, correspondiente a certificado médico emitido por Yerko Arancibia Alfaro.

28) Copia de resolución del Servicio de impuestos internos, sin fecha legible.

29) Copia autorizada de escritura pública



correspondiente a la notaría PATRICIO RABY, de fecha 20 de diciembre de 2016, repertorio 14405, y que corresponde a TESTAMENTO de Amalia Luque Sánchez.

30) Copia de carta de término de prestación de servicios de cobro / arrendamiento / corretaje, de Amalia Luque Sánchez a Jaime Heriberto López Valle, de fecha 19 de enero de 2017.

31) Copia de declaración de impuesto a la renta de la causante, N° 221129727, año tributario 2017.

32) Certificado del Banco Central de fecha 09 de enero de 2018.

33) Copia de declaración de impuesto a la renta de la causante, N° 234252168, año tributario 2018.

34) Copia de Resolución Ex. N°94.335, dictada por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 04 de julio de 2018, en Rol N°33.319-18.

35) Copia de reliquidación del Servicio de Impuestos Internos de fecha 12 de diciembre de 2018.

36) Cartola de cuenta corriente del Banco Santander N°0-000-06-36414-4, correspondiente a la causante, de fecha 31 de enero de 2019.

37) Copia de sentencia definitiva dictada el 18 de junio de 2019 en los autos RIT F-3799-2019, del Centro de Medidas Cautelares de Santiago.

38) Copia de audiencia preparatoria y sentencia definitiva dictada el 16 de diciembre de 2019 en los autos RIT F-7504-2019 del Centro de Medidas Cautelares de Santiago.



39) Copia de autorización de levantamiento de secreto bancario, otorgada por la causante el 25 de noviembre de 2019.

40) Copia de resolución dictada el 10 de marzo de 2020 por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, en autos RIT 9303-2019.

41) Copia de comunicación de cierre y decisión de no perseverar en causa Ruc N° 1910045090-1.

A folio 57:

42) Copia autorizada de escritura pública correspondiente a la notaría FERNANDO CELIS URRUTIA, de fecha 11-11-2009, repertorio 2810, y que corresponde a Mandato Especial para Cuenta Corriente de Amalia Luque Sánchez a Purificación Luque Sánchez.

A folio 58:

43) Copia de sentencia definitiva dictada el 28 de agosto de 2020 en los autos Rol V-146-2020 del 10° Juzgado Civil de Santiago.

A folio 59:

44) Certificado de nacimiento de Purificación Luque Sánchez.

45) Certificado de nacimiento de Amalia Luque Sánchez.

46) Certificado de matrimonio de Purificación Luque Sánchez y Luis Nelson Sepúlveda Araneda.

47) Certificado de nacimiento de Claudia Rosa Sepúlveda Luque.

48) Certificado de nacimiento de María Soledad



Sepúlveda Luque.

49) Pasaporte chileno de Purificación Luque, emitido el 13 de septiembre de 1991.

50) Acta de manifestación de Amalia Luque Sánchez, otorgada con fecha 30 de octubre de 2002 ante Martín Antonio Quilez Estremera, notario del Ilustre Consejo de Granada, España.

51) Pasaporte chileno de Purificación Luque, emitido el 10 de agosto de 2010.

52) Pasaporte español de Purificación Luque, emitido el 18 de mayo de 2007.

53) Pasaporte español de Amalia Luque Sánchez, emitido el 18 de mayo de 2007.

A folio 60:

54) Informe en derecho emitido por Ramón Domínguez.

A folio 76:

55) Copias de 13 correos electrónicos, de fecha 15 de junio de 2012, enviado por Bernardo Cazorla Luque, bcazorl@telefonica.net a Purificación Luque, puritaluque@gmail.com; de fecha 29 de enero de 2013, enviado por bcazorl@telefonica.net a puritaluque@gmail.com; de fecha 21 de julio de 2014, enviado por bcazorl@telefonica.net a Hernán Rivera Muñoz, hernanrivera@mi.cl con copia a puritaluque@gmail.com; de fecha 28 de agosto de 2014, enviado por bcazorl@telefonica.net a puritaluque@gmail.com, con copia a hr11511201@gmail.com; de fecha 23 de octubre de 2014, enviado por Hernán Rivera Muñoz hr11511201@gmail.com, a



bcazorl@telefonica.net; de fecha 30 de diciembre de 2014, enviado por bcazorl@telefonica.net a puritaluque@gmail.com, con copia a hr11511201@gmail.com; de fecha 27 de abril de 2015, a las 5:30, enviado por Bernardo Cazorla Luque bcazorl@telefonica.net a puritaluque@gmail.com; de fecha 6 de mayo de 2015, enviado por bcazorl@telefonica.net a puritaluque@gmail.com; de fecha 20 de mayo de 2015, enviado por bcazorl@telefonica.net a puritaluque@gmail.com; de fecha 27 de mayo de 2015, enviado por bcazorl@telefonica.net a puritaluque@gmail.com; de fecha 22 de diciembre de 2016, enviado por Andrea Abuhadba Merino andrea.abuhadba@santander a puritaluque@gmail.com; de fecha 21 de febrero de 2017, enviado por bcazorl@telefonica.net a puritaluque@gmail.com; y de fecha 15 de octubre de 2017, enviado por bcazorl@telefonica.net a puritaluque@gmail.com.

A folio 77:

56) Copia con firma electrónica avanzada de protocolización de certificado médico otorgado por Yerko Arancibia, el 19 de junio de 2020.

Testimonial:

A folio 105, con fecha 02 de septiembre de 2021, comparecen los siguientes testigos, los que previamente juramentados y libres de tacha, deponen al tenor del auto de prueba de folio 21:

1) **Ramón Domínguez Águila**, abogado, quien reconoce como íntegro y auténtico el informe en derecho aparejado a folio 60.

2) **Pablo Villarroel Venturini**, periodista, quien al punto



5, señala conocer hace más de veinte años a *Pura*, madre de Claudia y hermana de Amalia, y estar en contacto permanente con ella, pues sus hijos son sus nietos. Ha visto a Amalia permanentemente con *Pura*, pues vivían juntas, particularmente los años que interesan más, esto es, 2016. Afirma que la causante no tenía problemas de desplazamiento, y que era autónoma. Conversó muchas veces con ella, y nunca vio algo que le llamara particularmente la atención en el plano, cognitivo, mental o físico. Conversaban de todo tipo de cosas, como actualidad y política, y la causante mantenía un hilo lógico y argumental en la conversación. Tenía una actitud participativa en la conversación y demostraba interés, o sea, manejaba, digamos los tiempos, por ejemplo, los recuerdos de moverse para delante, para atrás, en el tiempo. Él le hablaba de Málaga, ciudad donde vivió mucho tiempo.

Repreguntado respecto del lugar físico en que las veía, señala el período que va desde 2005 a 2019, y las casas de Pedro Blanquier, de Carlos Alvarado, y el departamento.

Indica que la vio hasta 2019, porque a mediados de ese año la causante sufrió un accidente doméstico, y los familiares de ella se la llevaron a una clínica para hacerle un chequeo, y nunca regresó ni la volvió a ver.

En cuanto a las actividades que desarrollaba la causante, ejemplifica con que preparaba el té, se preparaba las cosas que llevaba a la mesa, se levantaba para ir al baño, de repente subía al segundo piso y bajaba. Si él pedía un diario o ella le ofrecía de repente un diario porque vio una cosa el día de hoy, se lo traía. Todo tipo de actividades



domésticas. No recuerda si la vio salir o no, pero en una de esas salió en algún minuto con *Pura* a comprar algo a la esquina.

Respecto de qué tipo de decisiones tomaba, señala que *Yo diría que no. Digamos, por qué no, nosotros teníamos una conversación o una relación como para yo ponerla en la instancia en la que ella tuviera que tomar decisiones. Entonces las decisiones que ella tomaba eran las propias de la situación de la vida cotidiana que tuvo, pero no decisiones de otro tipo.*

Contrainterrogado, señala que el testigo haber vivido en Valdivia, pero que viajaba a Santiago al menos una vez al mes, o cada 21 días. Mes por medio visitaba a *Pura*.

Vio por última vez a Amalia en 2019, y no detectó ninguna anomalía.

Señala no ser médico, sino doctor en comunicación, lo que le permite detectar si en lenguaje hay alguna inconexión lógica, alguna zona sintáctica o cosas así que le hagan sentir que la otra persona no está manejándose cognitivamente de forma adecuada.

Al punto 7, expone que en su parecer *Pura* es digna porque vivió con Amalia más de 20 años, y tenían una relación atenta, afectuosa, fraternal y de mucho cuidado entre ellas.

Repreguntado, señala que lo anterior lo que le consta porque lo vio personalmente, y cuando las separaron *Pura* se sintió pésimo, y le contó cosas que pueden suponer algún tipo de maltrato.

Recuerda que las separaron a mediados de 2019, y sabe



que Amalia falleció en algún momento del primer semestre de 2020. No tiene conocimiento de otras personas que tuvieran una relación cercana con Amalia.

Contrainterrogado, señala que Amalia fue llevada a la clínica en 2019 porque tuvo una caída en la casa, y quisieron ver si tenía algún tipo de golpe u otra situación. No le consta si fue llevada por su hermana Isabel u otro familiar de ella. No hay denuncias por maltrato de Purificación Luque contra sus familiares.

3) **Graciela Moreno Muñoz**, quien al **punto 5**, desconocer de qué testamento se le habla.

Repreguntada, señala que en el último trimestre de 2016 el estado de salud de la causante era bueno, que hacía sus cosas por sí sola, hacía su cama, ella tejía, salía a comprar, sacaba su dinero del cajero, tenía su *cabecita buena* y sabía lo que hacía, lo que le consta porque la veía, e iba a comprar lo que le encargaba. A veces la causante iba a comprar pan, mientras la testigo hacía las cosas del hogar. No se le olvidaban las cosas.

Señala que conversaba con la causante, que la veía tres veces a la semana en la casa de Pedro Blanquier, pues trabajaba en la casa de la señora *Pura* desde 1974.

Describe la rutina de la causante señalando que se levantaba en la mañana, se duchaba, tomaban café, se iba a su pieza, hacía su cama y jugaba con su gata.

Vio a la causante hasta 2019, cuando se la llevó su hermana para su departamento.

Contrainterrogada, señala que la causante tenía muy



buena relación con su familia en general.

4) **Juan Fernando Bernales Durán**, quien al **punto 5**, señala que siempre vio bien física y mentalmente a la causante. Desconoce el testamento y el mandato.

Repreguntado, indica que conoció a la causante hace unos 12 años, y en el último tiempo iba dos o tres veces por semana a hacer trabajos como barnizar, arreglar el jardín, hacer compras. La causante revisaba cuando terminaba sus trabajos.

Precisa que realizaba sus trabajos en una casa de dos pisos ubicada calle Pedro García, Providencia, no recuerda el número. Acota que le movía que la causante estuviera tan despierta y activa a su avanzada edad, pues lo citaba a las 09:00 o 09:15, y a esa hora ya había leído el diario, y se lo comentaba.

Lo anterior le consta por los trabajos que realizaba. Describe que *Purita* estaba un poco más delicada de salud, que no podía caminar, y que Amalia le ofrecía un vaso de agua, y subía y bajaba la escalera *como si nada*. Posteriormente, en marzo de 2019, él hizo la mudanza de Pedro Blanquier al departamento de calle Alvarado, y fue Amalia quien le indicó la posición en que quedarían las cosas.

Señala que dejó de ver a Amalia cuando se fue con su hermana, por motivos que desconoce. Después de eso la salud de *Purita* empezó a decaer. Posteriormente lo *invitaron* al funeral de Amalia.

Los trabajos consistían en haber barnizado dos veces la terraza y el portón, haber fabricado el portón y la reja.



También hizo la reja en la casa de la señora Isabel, cambió algún enchufe, a veces hacía compras.

Explica que la supervisión de los trabajos era visual, y que las actividades que realizaba era salir a buscar el diario hacia sesenta metros del portón donde lo tiraban, subir y bajar escaleras.

Contrainterrogado, señala que en la casa vivían Purificación y Amalia, que aquella tenía problemas en la columna y le costaba caminar, que los trabajos se los encargaba Purificación pero después la que le llevaba más trabajo era Amalia. Le pagaban en efectivo, *subía la señora Purita o me lo mandaban en un sobre.*

A folio 111, con fecha 01 de septiembre de 2021:

5) Carolina Andrea Villegas Martínez, terapeuta ocupacional, quien al **punto 5,** señala que, cerca de la navidad de 2016, Joaquín Caserino le pidió si podía ser testigo en una revocación de testamento a petición de la señora Amalia. Fue a una notaría en Gertrudis Echeñique con Apoquindo, conducida por Joaquín Caserino, quien no entró. En el hall de acceso estaban la señora Amalia, que era una señora mayor, de contextura delgada y pelo blanco, y la abogada de ésta, de nombre Margarita. La testadora era autónoma en su movimiento, y subió sola al ascensor. Entraron al hall de la notaría, donde estaban otras dos testigos. Llamaron a la testadora, quien entro sola y estuvo 10 o 15 minutos con el notario. Luego de que salieron, las hicieron pasar a una sala de conferencia con una mesa ovalada, donde se encontraban sólo las tres testigos, a la testadora, su



abogada y el notario. Entonces inició la redacción del testamento. Le llamó la atención que la testadora había nacido en España, que no tenía herederos, hijos ni esposo, y que tenía propiedades, entre ellas una en España. El notario leyó todo de corrido y en voz alta, tras lo que la testadora manifestó la voluntad de entregarle la herencia a su hermana Purificación, nombre que recuerda porque es extraño. También le iba a entregar otra cosa a otra persona. Preguntaron a los testigos si habían entendido, a lo que asintieron. Preguntaron si era la voluntad y en todo momento la señora Amalia estaba sólo con la abogada y manifestaba su voluntad de hacer lo que estábamos haciendo y por esa razón la testigo firmó. Vio un proceso totalmente normal, y al salir observó que la testadora estaba contenta, conversaba y sonreía.

Repreguntada, precisa que no vio alguna enfermedad o incapacidad en la testadora, que vio a una adulta mayor lúcida, autónoma y con una interacción social correcta y acorde.

Contrainterrogada, señala que no había visto con anterioridad a Amalia Luque, que desconoce cómo llegó a la notaría, pues estaba allí antes que ella, y que sólo estaba con su abogada.

6) **José Peña Henríquez**, quien al **punto 7**, señala que conoció a Purificación Luque como kinesiólogo, e iba a atenderla tres veces a la semana en la casa ubicada en Pedro Blanquier, donde vivía con la señora Amalia, donde, le decía que entre ellas existía una relación bastante amena, adecuada, con mutuo respeto entre ambas y al mismo tiempo con mucha interacción entre ellas. La causante era muy activa, y



estimulaba a *doña Pura* para que se activara y tuviera un mayor grado de funcionalidad. Amalia subía y bajaba escaleras.

Repreguntado, señala que la relación de ellas fue entre ambas y en este sentido de *doña Pura* hacia Amalia, en una relación de mutuo respeto, o sea ellas, se cuidaban mutuamente. Conoce a ambas desde 2015, las frecuentaba tres veces a la semana, con consultas de 45 minutos a una hora al mediodía. En la casa vivían *doña Pura* y Amalia, y nunca vio que Purificación violentara o agrediera a Amalia, y que, por su condición de salud, es imposible que Purificación atente contra otra persona.

A folio 182, con fecha 03 de noviembre de 2021:

7) Yerko Arancibia Alfaro, médico especialista en medicina interna y cardiología, quien al **punto 5,** señala que, a la fecha de otorgarse los instrumentos impugnados, lo único que tenía la causante era hipertensión arterial moderada, que estaba en tratamiento.

Repreguntado, explica que constató lo anterior pues ella consultó porque era hipertensa de años y recibía su tratamiento normal. En España recibía Natrilix, que en Chile no existía, por lo que le hacían *los arreglos* con Indapress, pero tenía los mismos miligramajes, pero ella fue capaz de ajustarlos dado que era su remedio. Fuera de eso tuvo dolencias pasajeras como resfríos y cosas sin importancia. En ningún caso presentó síntomas de alteración mental ni nada por el estilo.

En cuanto a que, habiendo señalado que la vio a la



causante entre 2007 y 2019, en qué condiciones la veía, señala que en algunas ocasiones fue a verlas a su domicilio, y la mayor parte de las veces ella asistía, o ambas, porque era capaz de manejarse sola. Puede decir con absoluta certeza que la señora Amalia era una persona sana en ese momento, salvo por su hipertensión.

Respecto a qué se refiere con que no presentara alteración mental y cómo le constaría, aclara que es médico internista hace muchos años, y que por aproximadamente 10 años trabajó como médico dentro del Hogar Español, que es un hogar de adultos mayores, así que al menos tiene alguna capacidad decidir si efectivamente eso existía o no.

Seguidamente se le exhibe el certificado médico acompañado en el N°27 de folio 55, y la copia de su protocolización agregado a folio 77. Señala que el primero es un certificado que él emitió el 24 de octubre de 2016, y el segundo es un certificado que entregó a *la sobrina*, a petición de ésta.

Relata que el documento de fecha 24 de octubre de 2016 se lo solicitó doña Amalia Luque, quien llegó sola a su oficina, y explicó que lo necesitaba para hacer trámites notariales. Le hizo algunas preguntas que se hacen a todos los pacientes, le tomó la presión y le preguntó por los medicamentos que estaba tomando. La señora estaba *con su cabecita absolutamente sana y normal*, a tal extremo que ella era capaz de modificar la dosis del remedio de acuerdo a si lo compraba en Chile o se lo mandaban de España.

Repreguntado respecto de si la causante tenía algún



problema de ubicación, espacio temporal, de memoria, problemas de desplazamiento o de juicio temporal, reitera lo anterior y agrega que *uno tampoco entra a hacerle preguntas, ya más complicadas del porqué y para qué porque ya pasa a ser una falta de respeto.*

Señala que la paciente era quien pagaba la consulta directamente en la secretaría. Indica que a la fecha de la consulta tenía 45 o 46 años de profesión.

Responde que la paciente hacía toda su vida normal, y que incluso, cuando en alguna ocasión fue a su casa porque su hermana estaba enferma, ella lo atendía, le contaba la situación y le mostraba los remedios.

En cuanto a que *era capaz de manejarse sola*, explica que era capaz de hacer todas sus actividades diarias sin ningún apoyo de nadie, incluso salir a la calle y tomar un taxi. *Imagina* que eso es una persona que tiene algún grado de deterioro por lo que sea, la que no capaz de hacerlo.

Respecto de lo que implican *actividades diarias*, explica que se preguntan cosas como qué cantidad de sal toma, quién prepara su comida, y entonces se va dando cuenta de que la persona tiene capacidad mental para que se le pueda explicar lo que tiene que hacer con los remedios y esas cosas.

Contrainterrogado respecto de si alguna vez le recetó algo relacionado con aspectos neurocognitivos, responde que en una ocasión ella le preguntó si podía tomar Actebral, pues se sentía con mucha fatiga y un poco cansada, pero el Actebral no tiene mucho efecto neurocognitivo y es casi un placebo. Eso sucedió *hace un par de años antes.*



En cuanto a haber practicado algún test psicológico al extender el certificado, señala que obviamente que no, cuando se tiene una sospecha clínica de que el paciente tiene alguna alteración, *obviamente qué se le va a hacer un test de ese tipo*, pero si la persona normal tiene un vocabulario normal con una ilación de ideas normales, no tiene ningún sentido.

Confesional:

A folio 157, consta el acta de audiencia confesional provocada por la demandada, a la que comparecieron:

1) La demandante **María Francisca Salazar Luque**, quien, al tenor del pliego de posiciones acompañado oportunamente, declara: 1) que es efectivo que nunca solicitó la interdicción de la causante; 2) que es efectivo que ninguna persona de su familia inició un proceso para declarar interdicta a la causante; 3) que la COMPIN nunca determinó alguna incapacidad mental de Amalia Luque; 4); que es efectivo que, a fines de 2016, ningún médico había diagnosticado la enfermedad de Alzheimer a la causante, a lo que añade que *no estaba muy bien de la cabeza* a esas alturas; 5) que le consta que Yerko Arancibia era su médico, pero no de cabecera, pues la veía de vez en cuando, cuando tenía resfríos, dolores o infecciones urinarias, pero no había un médico tratante; 6) que es efectivo que Purificación Luque Sánchez era la persona más cercana a la causante, en el sentido de que vivían juntas; 7) que es efectivo que Amalia Luque vivió por muchos años con Purificación Luque en calle Pedro Blanquier; 8) que es efectivo que vivieron juntas hasta el 11 de julio de 2019; 9) que es efectivo que tuvieron una estrecha relación, pero también había una relación bastante



buena y estrecha con la otra hermana que estaba viva; 10) que es efectivo que al momento de deducir la demanda, que no ha efectuado ninguna posesión efectiva, porque el segundo testamento no es válido, según su tía Amalia, porque lo conversó con ella, quien nunca recordó ese segundo testamento, siempre habló del año 2010; 11) que le consta que Purificación Luque aparece como heredera en el segundo testamento, desconoce si hizo la posesión efectiva; 12) que es efectivo que Amalia Luque le entregó dinero para comprar el departamento n°302, ubicado en calle Diego de Almagro N°4.765, comuna de Ñuñoa. En mayo de 2014 le entregó un cheque por 125 millones, pues en 2006 se fue de su casa y ella le ofreció un departamento en la calle Luis Beltrán para que se fuera a vivir sola allá. Estando allá le comentó que le gustaría ver una propiedad para comprar, y en el año 2014 su tía le avisó que le quería regalar un departamento. Ella y una prima son sus ahijadas, lo tomó por ese lado, y nunca le ha pedido dinero a su tía; 13) que es efectivo que compró el departamento con el dinero de su tía el 15 de mayo de 2015; 14) que es efectivo que en 2017 solicitó dinero a Amalia Luque, para pagar una deuda con la empresa Sociedad de Automatización y Comunicaciones Open Control Limitada, pero no prosperó, y vendió su departamento para pagar la deuda; 15) que es efectivo que trabajó en la empresa Sociedad de Automatización y Comunicaciones Open Control Limitada; 16) que es efectivo que, en el año 2014, Amalia Luque vendió a una inmobiliaria el inmueble ubicado en calle Los leones N°710, comuna de Providencia, en 400 o 500 millones. Explica que, como se vendió esa propiedad, ahí su tía le dijo que



tenía los recursos para comprarle un departamento. Le comentó también que una parte se la dio a su tía *Pura*; 17) que es efectivo que, luego de la venta de dicho inmueble, el 09 de mayo de 2014, se giró un cheque de 125 millones a su favor; 18) se retira; 19) que es efectivo que, entre 2013 y 2019, la absolvente recibió dinero de Amalia Luque mediante cheques girados por ésta, para muchas cosas, entre los que se encontraba compra de enseres, de cosas que necesitaba reembolsos, de cosas que ella le compraba; 20) que es efectivo que, durante 2015 y 2016, Amalia Luque invirtió en fondos mutuos y realizó rescates de los mismos, y que alguna vez la acompañó al banco a sacar euros porque los iba a mandar a España para la niña que trabajaba en el departamento de ese país, que se lo mandaba de regalo y ella lo sacaba a fondos mutuos. Le consta también porque muchas veces ellos pedían rescates de la cuenta corriente; 21) que le consta que entre 2015 y 2019 se le notificó una deuda por el Servicio de Impuestos Internos, desconoce si fue un juicio, por una plata que había traído de España y que no había sido declarada en Chile, ella pagó los impuestos en España, y al parecer en Chile sólo había que avisar, y no lo había hecho; 22) que es efectivo que hizo la tramitación para el pago de la multa, porque era un oficio que había que pagar una multa de cerca de 400 millones de pesos. Ella habló con una sobrina suya, quien, junto con su marido, que eran abogados, hicieron el trámite ante el Servicio de Impuestos Internos para pagar la multa; 23) que es efectivo que, a fines de 2018 o inicios de 2019, la causante recuperó cerca de 200 millones, la mitad de los que fue para el señor Casarino, quien sabía el mecanismo



para la devolución del dinero. Era más fácil para la tía *Pura* decir *que lo recupere, mitad para ti*; 25) que entre 2015 y 2018 fue *Pura* quien pagaba gastos y obligaciones personales, pues manejaba la cuenta; 26) que, en el año 2017, se puso término a los servicios de corretaje de Jaime López Valle, no por Amalia Luque, sin por María Soledad Sepúlveda, hija de la tía *Pura*, quien tomó las riendas de eso, pidió hacer una tasación de las propiedades y entregarle el corretaje a la cónyuge del señor Casarino; 27) que es efectivo que, entre 2015 y 2018, la causante cobró y percibió rentas de arrendamiento, que recibía la plata y se depositaba en la cuenta de la tía Amalia; 29) que no es efectivo que Amalia Luque se encontrara con sus facultades mentales sanas y fuera capaz de tomar decisiones al 20 de diciembre de 2015, y que las compras y ventas de propiedades y manejos de dinero no lo veía ella, sino *Pura* Luque; 30) que es efectivo que, en 2009, Amalia Luque le otorgó un mandato especial a Purificación Luque para administrar su cuenta corriente y sus fondos mutuos en el Banco Santander; 31) que, desde 2009, quien administraba no era Amalia Luque, pues delegaba todo en *Pura*; 32) que, el mandato antes señalado nunca fue revocado, pues confiaba plenamente en su hermana; 33) que es efectivo que Amalia Luque nunca objetó la administración de su hermana, ni le exigió una rendición de cuentas; 34) que es efectivo que la ejecutiva del banco Santander enviaba información bancaria de Amalia Luque al correo puritaluque@gmail.com, de Purificación, pues la causante no manejaba computador *ni nada de esas cosas*; 36) que es efectivo que el administrador de los bienes de Amalia Luque era



Bernardo Cazorla Luque; 37) que es efectivo Amalia Luque designó como legataria a su hermana María Isabel Salazar Luque; 38) que es efectivo que su hermana María Isabel Salazar Luque tuvo cáncer en 2019, año en que se operó para sacarse el útero; 39) que, en 2019, la causante giró un cheque a favor de María Isabel Luque para cubrir los gastos de su operación; 40) que desconoce si en el año 2015, Amalia Luque giró un cheque a favor de María Isabel Luque, por la cantidad de \$75.000.000.-; 41) que es efectivo que, desde 2015, Purificación Luque tiene problemas en la columna, que se operó, y que no puede desplazarse; 42) que es efectivo que, hasta el día de hoy, la absolvente se comunica con la demandada María Isabel Salazar Luque, y que vive con ella.

OCTAVO: Que, la demandada **María Isabel Salazar Luque** se valió de los siguientes medios probatorios en autos:

Instrumental

A folio 34:

1) Copia de correo electrónica enviado desde la casilla nmarinovic@myaa.cl a libreriahelios@gmail.com el 14 de octubre de 2020.

A folio 63:

2) Copia de correo electrónico de fecha 13 de octubre de 2019, de la casilla nmarinovic@myaa.cl a paulariveralu@gmail.com, reiterado a folio 65.

A folio 65:

3) Certificado de nacimiento de María Concepción Luque Sánchez.



4) Certificado de matrimonio de Fernando Salazar Valdés y María Luque Sánchez.

5) Certificado de defunción de Fernando Salazar Valdés.

6) Certificado de defunción de María Luque Sánchez.

7) Certificado de nacimiento de María Francisca Salazar Luque.

8) Certificado de nacimiento de María Isabel Salazar Luque.

9) Certificado de nacimiento de María del Pilar Salazar Luque.

10) Certificado de matrimonio de René Silva Maturana y María Salazar Luque.

11) Fotocopia de pasaporte de María Salazar Luque.

12) Fotocopia de pasaporte español de María Salazar Luque.

13) Fotocopia de pasaje emitido por Iberia.

14) Copia de epicrisis de María Salazar Luque, de fecha 17 de agosto de 2021, emitido por Clínica Dávila.

15) Fotografía de estado de cuenta de María Salazar Luque, emitido por Clínica Dávila el 28 de marzo de 2019.

16) Fotografía de Amalia Luque, de fecha 24 de diciembre de 2018.

17) Copia de escritura pública de aceptación de legado de especie o cuerpo cierto de María Isabel Salazar Luque, otorgada en la notaría de Valeria Ronchera Flores con fecha



16 de agosto de 2021, repertorio N°8.782-2021.

18) Informe de autenticación de evidencia, emitido por Ricardo Andrés Pastene Beytía con fecha 20 de agosto de 2021.

Testimonial:

A folio 116, con fecha 31 de agosto de 2021, comparecen los siguientes testigos, los que previamente juramentados y libres de tacha, deponen al tenor del auto de prueba de folio 21:

1) **Ricardo Pastene Baytía**, perito en filmaciones y audio, quien al **punto 5**, señala desconocer completamente si Amalia Luque padecía enfermedad o incapacidad. Agrega que hizo un informe de acuerdo a una selección de eventos en tres grupos de WhatsApp, del teléfono de la demandada. Los abogados de la demandada tenían una colección de eventos, consistente en textos, documentos adjuntos y mensajes de voz. Su participación consistía en verificar que lo que ellos decían correspondía a eso que dicen que estaba ahí.

Repreguntado, se le exhibe el informe aparejado entre páginas 22 y 81 de folio 65, cuya autoría y firma reconoce. Aclara que es perito en el área de filmaciones y audio en la Corte de Apelaciones de Santiago y otras 16 Cortes del País.

El abogado de la demandada había seleccionado eventos en un archivo de Excel, y ese listado se dividía en 3 hojas, y cada hoja correspondía a los rótulos de los chats mencionados y adentro de cada hoja, venía un listado en el que estaban fichadas todas las fechas, eventual persona que hablaba, principal. Lo revisó con el teléfono de la demandada, que es el mismo teléfono que aparece en un



escrito, que es una réplica que la demandante usó, y concluyó que esos eventos que están señalados ahí, correspondían efectivamente a eventos que estaban ahí. Lo que se hizo fue visualizar los eventos; los textos como imágenes de recorte de pantalla, los mensajes de audio fueron transcritos y los documentos los descargó y los agregó como anexos.

Oficios:

1) A folio 144, oficio N°445, de Banco Santander Chile.

NOVENO: Que la acción de nulidad absoluta intentada se funda en el artículo 1682 del Código Civil, esto es, la incapacidad absoluta de la testadora, por encontrarse en estado de demencia.

DÉCIMO: Que, atendida la materia sobre la que trata la Litis, esto es la nulidad de los testamentos otorgados por la causante, fundada en la incapacidad de la testadora, cabe tener presente que el artículo 456 del Código Civil, dispone *"El adulto que se halla en un estado habitual de demencia, deberá ser privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos. (...)".*

El artículo 465, por su parte, sostiene, en lo que aquí interesa, que *"(Y por el contrario) los actos y contratos (del demente) ejecutados sin previa interdicción, serán válidos; a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente."*

Luego, de acuerdo al artículo 1005, son inhábiles para testar, entre otros, *"3° El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia; 4° El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa"*, norma que por otro



lado, en su inciso final, establece "Las personas no comprendidas en esta enumeración, son hábiles para testar".

Agrega el 1006, que "El testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente es nulo, aunque posteriormente deje de existir la causa. Y por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el hecho de sobrevenir después alguna de estas causas de inhabilidad."

Así, el artículo 1445, prescribe que "Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: 1° que sea legalmente capaz; (...)", agregando en su inciso segundo que "La capacidad de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra."

El 1446, dispone que "Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces" y el artículo 1447, que "Son absolutamente incapaces los dementes, (...) Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución".

El artículo 1681, señala que "Es nulo, todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe par el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa."

Luego, el inciso segundo del artículo 1682, sostiene que "Hay (asimismo) nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces".

DÉCIMO PRIMERO: Que no existe controversia en el hecho



de que la causante, al momento de testar, no se encontraba sujeta a interdicción, lo que tampoco llegó a suceder con posterioridad.

En consecuencia, la carga probatoria que pesa sobre la demandante, radica en acreditar que la causante Amalia Luque Sánchez, al momento de testar, efectivamente se encontraba en estado de demencia; inhabilidad que podría hacer factible ubicarla dentro de aquellos a que alude el numeral 4° del artículo 1005, puntualmente, respecto de *"aquel que actualmente no estuviere en su sano juicio"*.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, el escenario descrito en el motivo anterior, en palabras del profesor Elorriaga de Bonis, en su libro "Derecho Sucesorio" (Segunda Edición actualizada, Editorial AbeledoPerrot, Legal Publishing, 2010) ocurriría en el caso de los dementes que no estén declarados en interdicción por demencia provisoria o definitiva, sujetos afectados por enfermedades mentales de diferente naturaleza o simplemente los privados del sano juicio por efectos de su avanzada edad; resultando, en todo caso, necesario que dicho impedimento ocurra al momento de otorgarse el testamento, lo que se desprende del término "actualmente" que utiliza el numeral 4 del artículo 1005, y que se ratifica con el mérito de lo señalado en el artículo 1006, en tanto exige que la inhabilidad ocurra al momento en que se otorga el testamento. Como es lógico, la resolución de ello, quedará subordinada a la prueba que pueda o no aportarse al proceso.

Agrega que lo anterior se vincula directamente con lo dispuesto en el artículo 1016 del Código de Bello, en tanto dispone que entre las cosas que debe expresar el testamento



abierto, debe indicarse "la circunstancia de hallarse (el testador) en su entero juicio", haciendo presente que, en cualquier caso, la declaración del Notario, no obsta a que pueda declararse la nulidad por estar el testador privado de razón, toda vez que dicha declaración admite prueba en contrario.

Por otro lado, sostiene que en el juicio de nulidad de testamento que se funde en la privación de razón del testador, la presunción legal beneficia al demandado y corresponde al actor aportar las pruebas que demuestren que aquél, al momento de otorgar su testamento, no estaba en su sano juicio.

Indica, además, que se ha resuelto que deben establecerse hechos constitutivos de síntomas característicos que conduzcan necesariamente a establecer la enfermedad que inhabilita para testar, y no otros; pruebas que deben acreditar de manera total e irredargüible los síntomas de la demencia la fecha del testamento u otra enfermedad que prive del sano juicio para testar, agregando que los signos de vejez, decrepitud, dolencias o decadencia física no conducen por sí solos ni necesariamente a la insanidad mental.

DÉCIMO TERCERO: Que, las demandadas opusieron a la acción intentada la excepción de litisconsorcio activo necesario, con fundamento en que, por no haber concurrido a demandar todas las personas señaladas como asignatarias en el testamento que se impugna, quienes sí accionan carecen de legitimación activa para hacerlo.

DÉCIMO CUARTO: Que el litisconsorcio necesario ha sido



definido por la doctrina como *aquel proceso con la presencia necesaria de varios sujetos, que de modo obligatorio deben formar parte de la relación jurídica procesal. En otras palabras, se trata de un proceso en el cual una de las partes (activa o pasiva) está necesariamente compuesta por varios sujetos* (Romero Seguel, Alejandro. Curso de Derecho Procesal Civil. Los presupuestos procesales relativos al órgano judicial ya las partes).

El litisconsorcio necesario puede ser activo o pasivo, según si la parte compuesta debe ser la demandante o la demandada, y propio o impropio, atendiendo a si es señalado expresamente por la Ley o si surge de la naturaleza de la relación jurídica deducida en juicio, lo que obliga a examinar ésta y constar si el rechazo de la alegación de la demandada conduciría a la vulneración de los principios que se desarrollan en la dúplica.

DÉCIMO QUINTO: Que, siguiendo el mismo desarrollo dogmático que emplea el tratadista citado en el motivo anterior, justifica la demandada la existencia de un litisconsorcio activo necesario en el principio de la bilateralidad de la audiencia, según el cual nadie puede ser condenado sin ser oído ni vencido en juicio, con lo que se pretende que los efectos de la sentencia no alcancen a aquellas personas que, por no haber sido demandadas, no han tenido ocasión de comparecer en el proceso lo que les convenga en defensa de sus derechos.

De la enunciación del principio que se esgrime se deduce que éste puede justificar un litisconsorcio necesario pasivo, caso contrario al de autos, en el que se encuentran



debidamente emplazadas ambas asignatarias del testamento que se denuncia como nulo, quienes han efectuado sus alegaciones y rendido pruebas en el proceso.

DÉCIMO SEXTO: Que, seguidamente, la demandada invoca la protección de derechos de terceros por extensión de los efectos de la cosa juzgada, cuyos derechos no pueden verse afectados por las resultas de un juicio en el que no han sido emplazados, argumento que no permite tampoco permite fundar la existencia de un litisconsorcio activo necesario, porque los derechos que, eventualmente, se verían afectados serán los de la parte pasiva.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que se descartará el tercer argumento de la demandada, consistente en una posible inutilidad de la sentencia, derivada de no haberse emplazado a todas las personas que era menester, toda vez que, dicho argumento dice relación con la parte legitimada pasiva.

DÉCIMO OCTAVO: Que, finalmente, cabe analizar si, como afirma la demandada, puede fundarse la existencia de un litisconsorcio necesario activo en la legitimación procesal.

Respecto de la legitimación, ha dicho la doctrina que *"...en su aspecto práctico, la legitimación es una condición de la acción que se verifica conforme a las pautas del derecho sustancial. En la mayor parte de los casos, la determinación de quiénes son los sujetos legitimados no viene dada expresamente por una norma legal, sino que se trata de un problema que se debe determinar en cada caso. De un modo excepcional el ordenamiento jurídico establece algunas pautas de legitimación, principalmente en relación a la legitimación*



activa para el ejercicio de las acciones constitutivas o declarativas (v.gr. art. 1683 CC). Esto se explica porque las sentencias constitutivas son manifestaciones excepcionales en la declaración judicial del derecho, y de ordinario, la creación, modificación o la extinción de un derecho o de un estado jurídico viene dada por una normativa legal de orden público que regula expresamente esta cuestión (por ejemplo, régimen de nulidad de ciertos actos o contratos)." (Romero Seguel, Alejandro. Sobre la legitimación en derecho procesal. Revista chilena de derecho, 1998, Vol.25 (3), p.691-693).

El mismo autor ha señalado que *"La doctrina procesal en forma mayoritaria defiende la existencia del litisconsorcio necesario en razones que atañen al derecho material, esto es, por la singular naturaleza o especiales características que presentan los derechos deducidos en juicio, o bien porque la declaración que el actor solicita del juez es de carácter o única para todos los litisconsortes, situación que requiere, en consecuencia, que concurren todos ellos al proceso, siendo además la sentencia que se dicte única para todos ellos.*

Bajo esta explicación, la existencia del litisconsorcio necesario es impuesta por la denominada "legitimación conjunta", que es aquellas que tendrías varias personas, en forma activa o pasiva, para demandar o ser demandadas. La existencia de la legitimación conjunta determina que se deba pronunciar una resolución única para todos los litisconsortes, por tratarse de una única pretensión. Sólo si se procede de esa forma el proceso podrá concluir con el pronunciamiento de una única sentencia, que sea eficaz para todos".



DÉCIMO NOVENO: Que, sin embargo, la identificación de la legitimación conjunta con la existencia de una única pretensión entre diversos titulares de la acción, debe ser matizada, porque su aplicación irrestricta a sujetos cuya legitimación no emana del ejercicio de un derecho subjetivo directamente relacionado con el acto o contrato, sino de un interés legítimo tutelado por el derecho.

En efecto, conforme con el artículo 1683 del Código Civil, la titularidad de la acción de nulidad absoluta corresponde no sólo a las partes o al otorgante de un acto o contrato viciado, sino que también a todo aquél que tenga interés en ello. En tal caso, no puede razonablemente privarse de acción a la parte desconocedora del vicio de nulidad por la sola inactividad de eventuales terceros que también tengan interés pecuniario en la declaración de nulidad, quienes también son titulares de la acción.

Asimismo, existen otros casos en que la acción interpuesta por un legitimado aprovecha a otros titulares de la acción que no han litigado; así, se ha reconocido por la doctrina que la acción oblicua o subrogatoria, deducida por uno de los acreedores del deudor que no ejerce sus derechos beneficia también a los demás acreedores que no han litigado, pues su efecto es hacer volver los bienes al patrimonio del deudor común, sobre el que todos pueden ejercer su derecho de prenda general (Alessandri, Arturo. Tratado de las Obligaciones, pp. 195 y ss.).

VIGÉSIMO: Que el acto viciado surte todos sus efectos en tanto no se haya declarado judicialmente su nulidad, por ello, encontrándose en vigor el testamento impugnado y, en



consecuencia, revocado el testamento anterior, los actores no comparecen ejerciendo un derecho emanado de la calidad de herederos, sino buscando el amparo del interés legítimo en adquirir tal calidad en virtud del testamento revocado, en la eventualidad de que el testamento posterior pierda su eficacia una vez dictada una sentencia que, eventualmente, declare su nulidad.

De tal modo, no comparecen ejerciendo conjuntamente un único derecho subjetivo, pues actualmente no existe comunidad hereditaria, sino que lo hacen individualmente en resguardo de sus respectivos intereses, los que tampoco emanan ni tienen relación con el acto que se impugna.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que alega también la demandada que el hecho de no comparecer todos los legitimados activos en un único procedimiento abre la puerta a que, rechazada la demanda interpuesta por uno de ellos, pueda otro hacer valer la misma pretensión, y que la demandante busca poner injustificadamente sobre las demandadas la carga de perfeccionar la relación procesal.

Tal argumento requiere considerar el texto del artículo 21 del Código de Procedimiento Civil; *"Si la acción ejercida por alguna persona corresponde también a otra u otras personas determinadas, podrán los demandados pedir que se ponga la demanda en conocimiento de las que no hayan ocurrido a entablarla, quienes deberán expresar en el término de emplazamiento si se adhieren a ella."*

Si las dichas personas se adhieren a la demanda, se aplicará lo dispuesto en los artículos 12 y 13; si declaran



su resolución de no adherirse, caducará su derecho; y si nada dicen dentro del término legal, les afectará el resultado del proceso, sin nueva citación. En este último caso podrán comparecer en cualquier estado del juicio, pero respetando todo lo obrado con anterioridad”.

Al respecto, ha dicho la Excma. Corte Suprema que, si la parte demandada estima que más personas debieron concurrir a entablar la acción, debió hacer uso de la facultad establecida en la norma citada, pidiendo que la demanda se ponga en su conocimiento, única actitud coherente con la buena fe procesal.

Así, sin perjuicio de haberse descartado en los motivos precedentes la existencia de un litisconsorcio activo de carácter *necesario*, el demandado que de buena fe busca evitar enfrentar múltiples procesos debe hacer uso de la herramienta procesal establecida al efecto por el legislador.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, por todas las consideraciones efectuadas en los motivos anteriores, se desestimaré la excepción de litisconsorcio activo necesario.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, desechada la excepción anterior, es necesario hacer una valoración de la prueba ofrecida por la partes, por consiguiente es menester referirse a la valoración de los medios de prueba rendidos durante el juicio para establecer qué hechos es dable tener por acreditados con el mérito de las mismas.

Desde el punto de vista de los instrumentos, estos no fueron objeto de impugnación alguna, razón por la cual para todos los efectos legales esta sentenciadora les confiere el



valor de plena prueba en estos autos, sin perjuicio de la pertinencia de ellos en atención a los hechos a probar fijados por el tribunal.

En lo que dice relación con la testimonial se ha procedido a una transcripción prácticamente literal de los dichos vertidos por los diversos testigos motivo por el cual se evitará, hacer referencia a aquel contenido más allá de lo estrictamente necesario. En la especie, las declaraciones de testigos se enfrentan a un examen de credibilidad, y para establecer el valor o la credibilidad que es dable asignar a los dichos del testigo, que se pondera también en base al testimonio mismo y se mide a la luz de su *consistencia* y concordancia o armonía que su versión de los hechos guarda con el resto de los antecedentes incorporados al juicio.

En este sentido la demandante no aparejó prueba testimonial, como si lo hizo la demandada, los que depusieron al punto de prueba 5 y 7 quienes fueron contestes en descartar que la causante haya enfrentado una enfermedad de discapacidad mental a la fecha de otorgar el mandato y testamento.

Por su parte, de la confesional provocada por la demandada Maria Salazar Luque reconoce que nunca se hizo un proceso de interdicción a su tía, que purificación y Amalia vivieron juntas los últimos años y tenían una estrecha cercanía. También reconoce que Amalia le entregó dinero para la compra de un departamento, que entre los años 2013 y 2019, recibió dinero de la causante, y que Amalia delegaba en Purificación la administración de sus cuentas y confiaba en ella.



Por su parte, como primera aproximación al estado de salud mental de la causante, se atenderá sus antecedentes médicos.

La ficha clínica de la causante, aparejada a folio 94, se inicia con fecha 03 de mayo de 2019, por la atención que se le prestara en la Clínica Alemana con motivo de un accidente doméstico.

Con fecha 15 de junio de 2020, se le diagnosticó *Hemorragia Digestiva Alta, Demencia Tipo Alzheimer y Tumor Craneano Parietal Izquierdo*, por la internista Macarena Honorato Olivares.

Posteriormente, el 30 de noviembre de 2019, tras aplicar test de MOCA y entrevistar a María Isabel Luque Sánchez y a Hernán Rivera Muñoz, hermana y cuñado de la paciente, la neuróloga María Isabel Behrens confirmó el diagnóstico de Alzheimer, señalando en el informe que se acompaña a folio 3 del cuaderno de medida prejudicial que *"He evaluado a la Sra. Amalia Luque Sánchez (...) por cuadro de deterioro de la memoria, orientación, función ejecutiva y lenguaje de al menos 5-7 años de evolución que conforma el diagnóstico de Alzheimer en etapa moderada"*. Tal informe fue complementado por otro, emitido el 17 de agosto de 2021, que agrega que *"la paciente obtuvo 7 de 30 puntos en la prueba cognitiva MOCA por fallas en memoria, orientación, juicio, función ejecutiva y lenguaje. Un puntaje menor a 19 es compatible con demencia. Aclaro que en este informe complementario que la fecha de inicio de los síntomas cognitivos (5-7 años), que indiqué en el informe anterior me fue informada por su hermana y cuñado. La velocidad de progresión del deterioro cognitivo es*



diferente en cada paciente, por lo que la data de inicio es difícil de determinar retrospectivamente si no es por el informe de terceros. Por otra parte, hay muchos elementos que pueden influir en el rendimiento cognitivo de un paciente. Un puntaje de MOCA de 7 puntos habría plantear una demencia de más de 5 años de evolución, salvo que la paciente estuviera afectada por algún interferente (infección urinaria, efecto de medicamentos), lo que no constaba al momento de su evaluación".

VIGÉSIMO CUARTO: Que, por su parte, a folio 56, la demandada Purificación Luque aparejó al proceso un certificado de fecha 24 de octubre de 2016, emitido por el internista y cardiólogo Yerko Arancibia, quien da cuenta de que *"la Sra. Amalia Luque Sánchez se encuentra en buenas condiciones de salud tanto física como mental, por lo que está apta para tomar cualquier tipo de decisión".*

A folio 77, se encuentra acompañado otro certificado del mismo médico, quien da cuenta de haber atendido *"a la Sra. Amalia Luque Sánchez en forma periódica desde nov. 2007 hasta Enero 2019, no presentado durante todo ese tiempo signos de deterioro cerebral, ni de enfermedad de Alzheimer".*

VIGÉSIMO QUINTO: Que de la confrontación de los informes emitidos por los médicos que atendieron a la causante se manifiesta que son del todo incompatibles, pues no resulta plausible que una persona que no presentaba absolutamente ningún deterioro cognitivo a enero de 2019, fuera diagnosticada con Alzheimer en junio del mismo año, considerando además que, en la entrevista efectuada el 15 de mayo de 2019 por la asistente social de la Municipalidad de



las Condes, también se observó *un deterioro cognitivo evidente y esperable a su edad.*

La resolución de tal disyuntiva puede ser resuelta por la explicación que el propio doctor Arancibia hace de su método declarando como testigo a folio 182, cuando reconoció que para extender sus certificados no realizó ningún test neuropsicológico a la paciente, por considerarlo innecesario. Tal falta de rigor, unida al hecho de no contar el facultativo con formación en el área de la salud mental, conducirá a desestimar sus conclusiones.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, sin embargo, el poderse establecer que la causante se encontraba en un manifiesto estado de demencia al menos en el primer semestre de 2019 no resulta útil para resolver la cuestión controvertida, toda vez que el testamento impugnado data del 20 de diciembre de 2016, lo que hace necesario el examen de los restantes antecedentes allegados al pleito para determinar si la demencia ya existía a esa época.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que la prueba testimonial allegada a folios 105, 111 y 182, consistente en los asertos de Pablo Villarroel, Graciela Moreno y Juan Bernal, así como también los del antes mencionado médico, Yerko Arancibia, no resultan de utilidad para descartar que la causante se encontrara en un estado de demencia a diciembre de 2016, pues todos ellos coinciden en la circunstancia de que ésta se encontraba en un perfecto estado de salud mental hasta el primer semestre de 2019, misma época en que la asistente social de la Municipalidad de Las Condes pudo observar *un deterioro cognitivo evidente y esperable a su edad, y que no entiende*



del todo el contexto de la entrevista.

De tal modo, no puede asignarse mérito probatorio a testimonios que recalcan una circunstancia claramente inverosímil.

Por su parte, el testimonio de José Peña tampoco resulta de utilidad, pues de éste no se desprende que haya interactuado mayormente con la testadora, ni aporta mayores antecedentes respecto de su estado cognitivo.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que las partes acompañan al juicio abundante prueba documental referida a anteriores circunstancias de la vida de la causante, a denuncias en sede de familia por un supuesto maltrato por parte de la demandada Purificación Luque, y a una supuesta administración torcida del patrimonio de la causante en virtud del mandato que le confiriera a su hermana, antecedentes que no resultan de utilidad, pues no dicen relación con el estado mental de Amalia Luque al momento de otorgar el testamento.

VIGÉSIMO NOVENO: Que tampoco resultan esclarecedores los antecedentes referidos a gestiones tributarias y bancarias realizadas por la causante en los años 2015 y 2016 que, a folios 55 y 56, acompaña la demandada Purificación Luque para justificar el buen estado de salud mental de su hermana, puesto que en ellos no consta que ésta -quien le había conferido un mandato de administración- haya actuado en forma personal.

TRIGÉSIMO: Que, de los antecedentes allegados por la demandante se puede desprender que en diciembre de 2016, la causante no presentaba un deterioro cognitivo manifiesto como



en 2019, pues como consta en el testamento, ello no fue observado por el notario autorizante, quien, como indica la testigo Carolina Villegas (folio 111) se entrevistó privadamente con la testadora por 10 o 15 minutos.

Asimismo, la testigo señalada pudo observar que la testadora parecía una persona lúcida y autónoma, y que su interacción social era correcta y acorde.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que, asimismo, absolviendo posiciones a folio 157, la demandante María Francisca Salazar Luque admite haber recibido cheques girados personalmente por la causante entre los años 2013 y 2019 (N°19), haberla acompañado, en 2015 o 2016, *al banco a sacar unos euros porque los iba a mandar a España* (N°20) y haberle solicitado, en 2017, dinero para para pagar una deuda, lo que le fue negado (N°14).

Tales conductas no se condicen con las de una persona manifiestamente demente y, por el contrario, la última de ellas denota una cierta autonomía para tomar decisiones financieras.

CUADRAGÉSIMO: Que, por otra parte, nota este tribunal que, pese a contar la testadora con vastos recursos económicos, no aparece de ninguno de los antecedentes allegados al juicio que, con anterioridad a la época del testamento, ninguno de sus familiares haya manifestado preocupación por su estado mental, ni haya sugerido la necesidad de que fuera examinada por un especialista.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que, por el contrario, también constan en el proceso antecedentes indiciarios de un



deterioro cognitivo por parte de la causante, lo cual, conforme con las máximas de la experiencia, es del todo ordinario para una persona de 94 años de edad.

En primer lugar, consta en el Informe Policial acompañado a folio 68 que la propia demandada María Salazar Luque declaró en causa criminal que *Para esa fecha (la del otorgamiento del mandato otorgado a Purificación Luque el 27 de octubre de 2016) la tía solía olvidar con facilidad las cosas, incluso las de mayor relevancia. Era evidente que su cabeza no estaba bien, pues ya hacía más de un año y medio que ya ni siquiera jugaban carioca como solían hacerlo, pues a mitad del juego ella olvidaba qué era lo que debían hacer y se confundía.*

Asimismo, como observa la demandante, en el propio testamento la causante no reparó haber dispuesto de un inmueble que ya había sido enajenado, y omitió señalar el dígito verificador de su número de cédula de identidad, antecedentes claramente indiciarios de que sus facultades se encontraban deterioradas.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que la existencia de un deterioro cognitivo que no era evidente al momento de testar hace menester determinar si éste llegaba al punto de la demencia.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, para tal efecto, se acompañó a folio 168 el informe evacuado por Carlos Ricardo Silva Rosas, perito neurólogo designado en autos, quien concluye que, al segundo semestre de 2016, Amalia Luque Sánchez presentaba un estado de demencia leve o adulto mayor con un trastorno cognitivo mayor etapa leve.



Arriba el especialista a tal conclusión, principalmente a partir de la evaluación efectuada por la neuróloga María Isabel Behrens. Al respecto, anota en la página 33 que "Estimo que este es el punto de análisis más importante para la pericia.

1. La DRA. MARÍA ISABEL BEHRENS PELLEGRINO claramente estableció que la SEÑORA AMALIA LUQUE SÁNCHEZ presentaba una demencia moderada a severa el día 30 de noviembre de 2019. La paciente obtuvo un muy bajo puntaje: 7/30.

2. La PROFESORA BEHRENS, quien validó la prueba de MoCA-S (versión en español) para la población chilena. Evidentemente, ella no realizó la evaluación en inglés.

3. La facultativa, tanto por lo registrado en la ficha clínica y en el informe complementario del 17 de agosto de 2021, la salvedad que la enferma estuviera afectada de algún interferente (infección urinaria, efecto de medicamentos), "lo que no constaba en el momento de su evaluación".

4. La lesión ubicada en el hueso del cráneo y no en el cerebro, calificada de "inespecífica" y luego "que impresiona de aspecto agresivo", no explica la demencia que padeció la SEÑORA AMALIA LUQUE SÁNCHEZ. Además, considerando la avanzada edad y condición de la paciente, no se obtuvo una biopsia que hubiera confirmado la naturaleza exacta de la lesión ósea.

5. Coincidió que la velocidad de progresión del deterioro cognitivo es diferente en cada paciente por lo que la data de inicio es difícil de determinar retrospectivamente si no es por el informe de terceros, pero un puntaje de MoCA de 7 puntos haría plantear una demencia de más de cinco años



evolución”.

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que, sin embargo, ha de tenerse presente que, como se señaló en el motivo décimo segundo, la capacidad de las personas se presume, y es el demandante quien debe probar su incapacidad, para lo que no basta que se establezcan circunstancias que hagan plausible que la testadora se encontrara en un estado de demencia, sino que ello debe ser establecido de manera indubitada.

De ese modo, para que el peritaje establezca que la causante se encontraba demente al momento de testar, es menester que se descarte toda posible interferencia en los resultados obtenidos por la neuróloga que examinó a la paciente, y que, corroborados los resultados, la proyección efectuada hacia el pasado sea la conclusión única a la que pueda arribar la ciencia.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que, establecido lo anterior, se observa en primer lugar por esta sentenciadora que las conclusiones del peritaje se derivan aquéllas obtenidas por la doctora Behrens provienen de una única entrevista, oportunidad en que no constaba que la paciente estuviera afectada por algún interferente, como infección urinaria o efecto de medicamentos.

Sin embargo, ni la doctora Behrens ni el perito designado en autos analizan ni explican el efecto que pudo haber tenido en la progresión del deterioro mental de la paciente las circunstancias vividas en los meses previos, esto es, una *fractura del quinto metacarpiano izquierdo* en mayo de ese año y una *fractura de la primera vértebra lumbar*,



que requirió su hospitalización en el mes de julio, así como la necesidad de mudarse de la casa que compartía con su hermana Purificación, con quien, como señaló a la asistente social de la Municipalidad de las Condes, se encontraba a gusto, cuestión que también declara la absolvente Maria Salazar, en torno a la cercanía de ambas hermanas.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que, asimismo, respeto de la lesión craneana detectada en julio de 2019, identificada como tumor en la ficha clínica (folio 94), el perito razona que, *"la lesión ubicada en el hueso del cráneo y no en el cerebro, calificada de "inespecífica" y luego "que impresiona de aspecto agresivo", no explica la demencia que padeció la SEÑORA AMALIA LUQUE SÁNCHEZ. Además, considerando la avanzada edad y condición de la paciente, no se obtuvo una biopsia que hubiera confirmado la naturaleza exacta de la lesión ósea"*.

Como señala el perito, tal falta de especificidad en el diagnóstico, así como la falta de estudios que permitieran aclarar su naturaleza impide al médico atribuir a dicha lesión el deterioro mental de la paciente, pero por otra parte, impiden a esta sentenciadora descartarla como un elemento que pudo influir en el resultado obtenido en la prueba de MoCA-S y, en consecuencia en la proyección que pudo hacerse del desarrollo pasado de la enfermedad.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, por otra parte, la falta de constancia de interferentes al momento de la evaluación no es tampoco suficiente para descartar que éstos existieran, máxime si la paciente fue atendida en una sola oportunidad, por lo que no se hizo un seguimiento de su evolución.



CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que, incluso salvando lo anterior, la circunstancia de que el deterioro cognitivo de la causante no fuera manifiesto a la época de testar, y el hecho de que los antecedentes que dan cuenta de éste sean insuficientes para establecer un estado actual de demencia, dejan sin corroborar la proyección efectuada por el perito, proyección que, si bien es plausible y se corresponde con lo que observa normalmente la ciencia, resulta insuficiente para establecer con total certeza que Amalia Luque Sánchez se encontrara demente al momento de testar y así vencer la presunción de capacidad que establece la Ley.

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que afirma también la demandante que Amalia Luque Sánchez habría sido también inducida a testar por fuerza o dolo de la demandada Purificación Luque, circunstancia que sería compatible con ser una mera apariencia la voluntad manifestada en el testamento, afirmación que busca acreditar con una serie de comunicaciones de mensajería *WhatsApp*, en las que la demandada María Isabel Salazar Luque señala haber sido informada por terceras personas respecto de una maquinación mediante la cual habrían *cambiado* el testamento anterior de la causante.

Sin embargo, tales alegaciones resultan impertinentes en la especie, toda vez que dichos vicios, conforme con el artículo 1682 del Código Civil, pueden conllevar la nulidad relativa del acto, acción que no ha sido deducida en estos autos.

QUINCAGESIMO: Que, por la anteriores consideraciones, se desestimaré la acción de nulidad de testamento.



III.- EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD DE MANDATO:

QUINCUGÉSIMO PRIMERO: Que la demandada Purificación Luque opuso a la acción en análisis la excepción de falta de legitimación activa, con fundamento en que los actores carecen de un interés patrimonial cierto en la declaración de nulidad del mandato.

QUINCUGÉSIMO SEGUNDO: Que, habiéndose desestimado la acción del nulidad de testamento de 2016, que revoca el testamento otorgado en 2010, por el que los actores fundan su interés para deducir la acción, no cabe sino concluir que éstos no tienen la calidad de herederos de la mandante y, en consecuencia, no se encuentran legitimados para pedir la nulidad del mandato, por lo que la excepción será acogida, y la demanda desestimada.

QUINCUGÉSIMO TERCERO: Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, siendo el mandato incluso anterior al testamento que también fue impugnado en esta causa, igualmente puede predicarse a su respecto que los antecedentes allegados al juicio resultan insuficientes para tener por establecido que la Amalia Luque se encontrara demente al momento de otorgar el mandato.

IV.- EN CUANTO A LA ACCIÓN DE INDIGNIDAD PARA SUCEDER:

QUINCUGÉSIMO CUARTO: Que la demandada Purificación Luque opuso también la excepción perentoria de falta de legitimación activa, con similares fundamentos expuestos a propósito de la acción de nulidad de mandato.

Así, descartada ya la calidad de herederos de los demandantes por las razones indicadas en el motivo



quincuagésimo segundo, se acogerá por las mismas razones la excepción de falta de legitimación activa, y se desestimará también la acción de indignidad sucesoria.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, no se observa en autos antecedentes alguno que permita relacionar con la maquinación que alega la demandante con a la demandada Purificación Luque, toda vez que el único antecedente referido a ésta, esto es, las declaraciones de la codemandada María Isabel Salazar Luque ante la Policía de Investigaciones y en comunicaciones de mensajería *WhatsApp*, señalan como gestora del supuesto fraude a una persona ajena al juicio llamada Marisol.

QUINCUAGÉSIMO SEXTO: Que la restante prueba en nada altera lo precedentemente razonado.

Por estas consideraciones y teniendo presente, además, lo previsto en los artículos 1437 y siguientes, 1547, 1698 y 1793 y siguientes del Código de Civil; 144, 170 y 254 del Código de Procedimiento Civil, **SE DECLARA:**

I. Que se rechaza la objeción documental de folio 110.

II. Que se rechaza la demandada de nulidad de testamento deducida a folio 1.

III. Que se rechaza la demanda de nulidad de mandato interpuesta a folio 1.

IV. Que se rechaza la demanda de indignidad sucesoria deducida a folio 1.

V. Que no se condena en costas a la parte demandante, por haber litigado con motivo plausible.



C-13439-2020

Rol N° 13.439-2020

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

PRONUNCIADA POR ISABEL MARGARITA ZÚÑIGA ALVAYAY, JUEZA
TITULAR DEL PRIMER JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

rfu

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162
del C.P.C. en **Santiago, quince de Marzo de dos mil veintidós**

